

ILAVE un escenario de transición política y social
Estudio de caso sobre los sucesos de Abril del 2004, acaecidos en la
ciudad de Ilave (Puno)

Introducción:

Ilave es la capital de la provincia de El Collao, provincia ubicada en la región de Puno, al sureste del Perú. Es la puerta de entrada comercial con el vecino país de Bolivia por lo que forma parte de un importante circuito comercial que articula el sur peruano con los países fronterizos de Bolivia y Chile, sin embargo, el desarrollo económico de la región es bastante incipiente, caracterizado, sobre todo, en la primarización de su economía.

En términos relativos el altiplano peruano –como se denomina al macizo de la meseta del cual es parte Puno- aporta sólo en un 2.1% al PBI nacional, lo cual confirma su marginalidad con respecto a otras regiones del país. Debido a la falta de políticas de desarrollo regional y de políticas dirigidas hacia el sector agropecuario, principal actividad de la región, la zona enfrenta altos índices de pobreza. Por lo que, parte de los conflictos surgidos en la región son fruto de la sensación de abandono y olvido que experimentan los habitantes de la zona con respecto del gobierno central y a los amplios márgenes de pobreza que experimentan la mayoría de sus provincias.

Los terribles sucesos de abril del 2004 protagonizados por la población de Ilave hicieron virar nuestros ojos hacia esta región marginal y olvidada del país. Las imágenes de la más cruda violencia colectiva transmitida por la televisión nacional, fue espectada con asombro por casi todos los peruanos. Las imágenes de miles de personas linchando públicamente a varios funcionarios públicos nos dieron la proyección de una sociedad violenta y “casi salvaje”. Desde distintos puntos de vista no faltaron las explicaciones étnicas para entender los sucesos violentos, considerando que, la violencia suscitada no podía ser entendida sino era por condiciones culturales diferentes a una mayoría “civilizada”. Sin embargo, la explicación étnica pronto pierde sentido

cuando se constata que similares sucesos se protagonizaban en otras partes del país.

La extrañeza y la curiosidad hacia los sucesos nos impulsaron para acercarnos a una realidad local lejana a la gran urbe limeña. El primer impulso fue seguir las pistas de una sociedad local, diferente a la nuestra, que nos podía dar cuenta de procesos de larga data y de cuestiones pendientes para el desarrollo de una política democrática en nuestro país. Pues los sucesos de llave nos ponían en alerta sobre una realidad social y política que cuestionaba profundamente los términos de un proceso democrático que se pensaba en camino y sin tantas fricciones por medio.

En el Perú se han experimentado tres grandes procesos democratizadores, entendidos estos como mecanismos de inclusión política: el primero, la inclusión de la mujer como sujeto de derecho al voto, a mediados de la década de 1950; el segundo, la inclusión de los analfabetos, a fines de la década de 1970, población mayoritaria excluida hasta ese entonces; y el último, la inclusión de partidos de base popular (el APRA y las diferentes izquierdas) vetados antes de la política electoral.

Al mismo tiempo se dio inicio a la tan ansiada reforma agraria de 1968. La cual al quebrar el poder económico de los grandes poderes del país, terminó por romper el poder de la clase oligárquica. Lo cual significó la reestructuración política y social del país y con esto la reconfiguración de una estructura de poder que había funcionado por largas décadas en el país.

Estos procesos significaron en la práctica la inclusión de grandes mayorías al escenario político nacional y regional; pues también por esos años, se dieron las reformas de los gobiernos de base local. Con lo cual, se otorgó poder a los gobiernos locales que habían funcionado como meros apéndices del gobierno central, y se dio inicio a un juego político electoral en escenarios locales. Configurando así nuevos escenarios de competencia política confinados antes al espacio nacional.

Los sucesos acaecidos en llave nos ponen de relieve un espacio político local que ha sido estudiado muy poco, aún cuando contamos con algunos estudios de antropología política dedicados al tema, todavía se sabe muy poco sobre una realidad política regional y local del país. Por tanto, creemos que acercarnos a una sociedad local como la llaveña, con sus particularidades, nos puede dar algunos elementos fundamentales para entender procesos políticos nacionales que se pierden cuando el análisis se centra en espacios de actuación mayores.

Los sucesos de llave además, nos ejemplificaron de manera directa un escenario político excluyente de facciones encontradas, donde los canales formales de revocatoria y fiscalización de autoridades locales no funcionó debidamente o simplemente no se tomaron en cuenta. Entonces, a pesar de los procesos de inclusión democrática implementados ya hace algunas décadas nos queda la pregunta por una exclusión persistente, sobre todo en la manera de concebir el espacio y el juego político entre los actores locales.

Así, en un primer momento nos acercamos al problema planteado sobre la base que existían estructuras de sentido que otorgaban ciertas reglas y parámetros para el juego político. Pero a medida que nos fuimos adentrando en el mismo nos dimos cuenta que además se tenía que dar cuenta de procesos y contextos que rebasaban la sola explicación de la cultura política.

En este sentido, quisimos dar cuenta de los procesos sociales y políticos de la historia regional y local, tratando de identificar tradiciones y persistencias políticas, a pesar de la implementación de diversas reformas. Al mismo tiempo al corroborar una realidad local profundamente desigual, con enormes índices de pobreza, consideramos que este factor podía ser parte para las explicaciones sobre el ansia de poder y manejo de recursos públicos que están detrás de los sucesos de llave.

Finalmente, consideramos como fundamental entender la institucionalidad política presente en la zona, la cual por su reciente implementación –el proceso de municipalización data de unas dos décadas- parece traer consigo enormes dificultades para implementar un proceso político democrático así como un juego electoral con transparencia.

En suma, nos dimos la tarea de dar cuenta de 4 fenómenos que consideramos como claves para entender los sucesos de Abril del 2004:

- Una estructura de sentido que configura los sentidos comunes para establecer reglas y parámetros de juego político local. Entendida ésta como parte de una cultura política presente.
- Los procesos históricos que generan tradiciones y persistencias difíciles de cambiar a pesar de la implementación de reformas que suponen la inclusión de nuevos sentidos y reglas de juego político.
- Las enormes brechas de desigualdad, por lo que la escasez de recursos siempre marca la pauta para la movilización social.
- La implementación de una nueva institucionalidad como el municipio provincial.

El contexto en el que se realiza la investigación es, entonces, un escenario de transición, donde perviven lógicas tradicionales, pero que a la vez, se tiene que responder a nuevos parámetros de actuación política. Cómo se reconfiguran los sentidos de actuación, qué persiste de la tradición, qué se renueva, serían algunas de las preguntas que guían el trabajo.

I. Características generales de la región

1. Contexto socio económico de la región de Puno

La región de Puno geográficamente está conformada por una suerte de dualidad: por un lado, la meseta del Collao, zona de mayor densidad y de mayor crecimiento económico; y otra, conformada por las provincias de Carabaya y Sandía que corresponden a la zona de selva alta, espacio poco articulado al resto de la región. El altiplano puneño cuenta con condiciones

climáticas extremas: inundaciones, sequías y heladas, desfavorables para la actividad ganadera y agrícola, lo cual condiciona la precariedad e inseguridad de la actividad económica de la zona pues son precisamente las actividades agropecuarias las principales ramas de actividad de su población (40% de la PEA del departamento para el año 1993¹).

Las características de pobreza de la región no hacen más que confirmar la precariedad de las condiciones de vida de su población. Según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares para el año 2001, el 78% de la población puneña se encuentra en una condición de pobreza total y un 46% está en condición de pobreza extrema lo que ubica a la región en el cuarto lugar del ranking de pobreza después de las regiones de Huancavelica, Huanuco y Apurímac. Si estos datos se desagregan a nivel provincial, sólo tres de sus trece provincias tienen un promedio de vida regular: Puno, Chucuito y San Román; cuatro son consideradas como muy pobres y las seis restantes son consideradas pobres, la provincia de El Collao –escenario de los conflictos de llave- entre éstas.

La población puneña es mayoritariamente indígena. Los grupos indígenas de la zona se dividen en dos grupos étnicos: quechuas y aymaras. Si bien, el porcentaje de la población indígena ha ido decreciendo debido a los programas de educación bilingüe aplicados en la zona, para el censo de 1993 la población quechua y aymara hablante es aún mayoritaria: 43% y 32% respectivamente, frente a un 23% castellano hablante.

La característica indígena de su población, sin embargo, no ha significado que se den conflictos de tipo étnico en la región, pues los conflictos sociales han estado ligados sobre todo a la tenencia y propiedad de la tierra como principal recurso movilizador debido a su importancia económica. En este sentido, la característica indígena de la población puneña no ha sido agente de conflicto, si no que, ha servido más bien, como plataforma de discursos indigenistas desde comienzos del siglo XX y políticas interventoras del Estado y la Iglesia Adventista dedicados ambos a “civilizar” y “modernizar” a las masas indígenas rurales a través de la educación.

2. Historia regional

Puno tierra de terratenientes y hacendados, primero, de nuevas elites ascendentes después, estuvo atravesada por conflictos y cambios sociales a lo largo del siglo XX. Por periodos intermitentes, políticos e intelectuales colocaron la mirada sobre Puno por el grado de conflictividad que puede adquirir la región.

La historia regional puneña tiene como el principal protagonista hasta fines de la década de 1980 el conflicto por la tenencia de la tierra. Sociedad eminentemente rural y ganadera la tierra constituye un recurso valioso y escaso para la población. Los procesos de concentración y minifundización de la propiedad marcan las idas y venidas de los grupos de poder político y económico de la región, así como los cambios y movilizaciones sociales experimentados en torno a ésta.

Ya a fines de los 80 con la actividad agropecuaria totalmente minifundizada y en franco retroceso y deterioro, la tierra dejó de ser factor de movilización social. Así, hoy los conflictos que se suscitan en las diferentes provincias de la región están ligados a cuestionamientos de la gestión pública municipal, convirtiéndose éste en el principal factor de inestabilidad política, los sucesos de Ilave serían uno de los tantos ejemplos de estas nuevas formas de movilización y estallido social.

2.1 Los ejes económicos

El eje económico de la región de Puno ha marcado de algún modo las idas y venidas de su historia social y política. Desde fines del siglo XIX hasta la década de 1980 el altiplano es una región netamente ganadera. La historia regional, en este sentido, se articula con la caída y alza de precios de lanas y fibras de ovinos y auquénidos, pero además con las condiciones climáticas y sociales que pueden afectar la tenencia y propiedad de la tierra. El periodo de las lanas, como ha denominado Tamayo, ha este largo lapso periódico presentan hitos de una elevada conflictividad en torno a la tenencia de la tierra (Tamayo, 1982). El primero de ellos se ubica entre los años 1875 y 1932, periodo de la expansión de las haciendas en perjuicio de las comunidades indígenas-campesinas. El segundo de ellos, se ubica a fines de la década de 1970 y toda la década de 1980, periodo en el que la lucha se da entre grupos campesinos: los beneficiados por la reforma agraria unos, y los que no fueron favorecidos por ésta, los otros.

El eje económico, caracterizado hasta la década de los 80 por la actividad ganadera, comienza a resquebrajarse ya por los años 1950 y con esto se da inicio a grandes cambios económicos, políticos y sociales que reconfigurarán la estructura social regional. Por estos años la actividad ganadera comienza a decaer produciendo un franco retroceso de las elites económicas, surgiendo en el escenario económico y político nuevos grupos sociales. La actividad comercial comienza a ganar preeminencia frente a la actividad ganadera, produciéndose la emergencia de un “sector social intermedio” denominado como cholo. Si hasta los 50 el poder político y económico de la región había estado en manos de la clase oligárquica representada por terratenientes y hacendados, a partir de esta década los espacios de poder también son filtrados por estos nuevos sectores emergentes.

Hoy en día la actividad ganadera continúa siendo la actividad económica que alberga el mayor porcentaje de la PEA regional. Sin embargo, ésta ha dejado de ser el eje económico por los grandes problemas de descapitalización que enfrenta. El comercio se ha convertido así en el nuevo eje económico regional, señal de aquello es el crecimiento vertiginoso que han experimentado ciudades como Juliaca e Ilave, ciudades intermedias de paso comercial obligado.

La actividad comercial caracterizada, sobre todo, por el intercambio de productos de contrabando, provenientes de la zona de frontera, no ha significado el crecimiento ni el desarrollo social de la región. Como veíamos antes los niveles de pobreza y marginalidad económica son las características

sociales y económicas más resaltantes del altiplano peruano. Este es el escenario sobre el cual se levantan los nuevos conflictos sociales protagonizados en la región.

2.2 Los actores sociales

Las primeras décadas del siglo XX estuvo caracterizada por “la expansión violenta del latifundio, la aparición de los gamonales típicos...” (Tamayo, 1982: 87). De este tiempo datan las historias de personajes abusivos y violentos que actuaban con poder absoluto sobre una mayoría indígena completamente excluida de los mínimos derechos de ciudadanía.

La expansión de las haciendas en perjuicio de las tierras comunales de ayllus y comunidades campesinas se realizó a través de la fuerza y del poder omnímodo de gamonales y terratenientes. Estos no sólo utilizaron la violencia para apropiarse de tierras comunales, si no además, utilizaron su poder político para legalizar la apropiación de este recurso. La imagen que proyecta la región por estas décadas es un escenario social convulsionado plagado de bandas armadas por los terratenientes locales, los cuales hacen cuanto quieran con la población mayoritariamente indígena-campesina.

A la par de los conflictos y por estos, el escenario puneño estará protagonizado también por los indigenistas de comienzos del siglo XX. El discurso indigenista con sus diferentes matices tuvo la característica común de pensar la inclusión indígena en base a la educación. Muestra de esto fueron las políticas de educación rural implementadas con gran impulso en Puno desde los años 30. Antes del Estado, la preocupación por la educación indígena fue parte de la intervención de la Iglesia Adventista que, desde comienzos del siglo XX, ingresó al territorio puneño con la idea de “civilizar” y “moralizar” a los indios.

Junto a estas ideas educativas también se levantaron desde el indigenismo proyectos más políticos como la creación del Comité Pro-Derechos Indígenas en la década del 20. El cual intentó ser una asociación gremial que represente y apoye a los indígenas en el pedido por la propiedad de su tierra usurpada por terratenientes y gamonales.

Sin embargo, la buena voluntad indigenista duro muy poco, pues el poder local representado por gamonales, mistis y mestizos, lograba imponerse a cualquier intento de reforma o control impulsado desde afuera.

A partir de la década de 1950 se generan grandes cambios en la estructura de poder de la región. Con la actividad ganadera en retroceso se erigen nuevas elites económicas que disputaran el poder de los terratenientes.

La estructura social que se veía hasta ahora como inmutable empezó a transformarse a favor de la inclusión de una población campesina e indígena. De esta manera, el escenario social y político se complejizó para dar paso a nuevos actores sociales que influirán de un modo u otro la actual conformación de los espacios políticos locales.

La ciudad de Juliaca que albergaba a grupos sociales ascendentes provenientes del campesinado y de la elite comercial, inició la disputa a la ciudad de Puno –cuna del poder tradicional- por el poder político y económico de la región. Desde las canteras del comercio surgieron los hermanos Cáceres Velásquez como la expresión de una nueva clase media mestiza, los cuales constituirán el bloque político de más larga duración en la región, desde la década del 60 hasta fines de los 80.

Roger Cáceres Velásquez, hermano mayor de la familia, salió elegido diputado por Puno en el año 1956 y se mantuvo dentro del Estado hasta el año 2000. Por varios períodos familiares y allegados a este personaje llegarán al Congreso Nacional de la República. La estrategia empleada por los hermanos y su bloque político para mantenerse en el poder fue crear un espacio político cerrado y clientelista en Puno, sobre todo en la ciudad de Juliaca donde mantuvieron desde 1964 hasta el año 1992 la alcaldía provincial de San Román.

La historia de los hermanos Cáceres Velásquez se inicia en los 60, cuando logran cooptar las bases sociales del MOSICP, que por los años 50 y 60 tenía un trabajo fuerte en las bases campesinas puneñas. A inicios de 1960 logran formar su propio grupo político: el Frenatraca. Con su propio grupo político, canalizando los pedidos de las bases desde el parlamento por medio de Roger Cáceres Velásquez y transmitiendo continuamente las “obras” por la radio Sol de los Andes de propiedad de ellos mismos, el Frenatraca se apropió del espacio político puneño por varias décadas. Tal como lo habían hecho antes los terratenientes ahora los Cáceres Velásquez legislaban a favor de sus intereses y parcialidades.

Por otro lado, tal como lo habían hecho antes los adventistas, a fines de la década del 50 la Iglesia Católica con los hermanos Maryknoll ingresan en el campo puneño con la idea de ayudar en el desarrollo rural de la zona. Con esta concepción fundan dos Institutos de Educación Rural (IER) uno en Ayaviri, zona quechua ubicada al norte de la región; y otro, en Juli, zona aymara ubicada al sur. Tales institutos funcionaron como espacios de preparación técnica y política de los campesinos. Además, con la creación de la Radio Onda Azul que difunde programas en quechua y aymara favorecerán en la creación de una opinión pública favorable en temas de justicia social y reforma agraria, así como la reivindicación del poblador campesino.

Esta iglesia con ideas progresistas colaboró abiertamente con la acción gremialista de la izquierda. Como preludio a los conflictos de la década de los 80 “sus parroquias y las redes en torno a éstas aparecerán como un espacio propicio para respaldar a los campesinos que sienten, crecientemente, que la ansiada reforma agraria los ha dejado de lado”. (Rénique, 2004: 214)

Paralelamente al indigenismo tradicional de inicios de siglo, que veía la cuestión del indio como un problema de exclusión basado en las condiciones étnico-culturales, se forma otro discurso que traduce el problema indígena como una cuestión económica. Esta tradición nacida desde el seno del indigenismo de la década de 1920 con José Carlos Mariategui derivó en un

discurso clasista a fines de la década del 50. Ya en 1947 se forma la Confederación Campesina del Perú (CCP) como órgano gremial campesino, el cual entendió el conflicto por la tenencia de la tierra como una lucha entre clases sociales. En Puno, la acción gremialista vendrá a cristalizarse con la creación de la Federación Departamental Campesina de Puno (FDCP) a fines de la década del 70.

Es así como el discurso de corte clasista, en las zonas predominantemente rurales como Puno, va creciendo a partir de la década de 1950 hasta convertirse en hegemónico en los 70 y 80. Los grupos de la izquierda peruana como Vanguardia Revolucionaria (VR), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) entre otros más pequeños, tomarán como principal plataforma de lucha el gremio campesino y durante los 80 disputaran junto al Frenatraca los espacios de representación política local.

En la década de 1980 encontramos en la región de Puno una densa red de organizaciones sociales y políticas:

- Los grupos de izquierda, unos más radicales que otros, disputándose el control del gremio campesino de gran vitalidad por ese entonces. Y los menos radicales ingresando a la arena electoral vitalizando un escenario que había estado cerrado por la dictadura militar de casi más de una década de subsistencia.
- El Frenatraca de los hermanos Cáceres Velásquez que con una lógica pragmática había sabido mantenerse como bloque político representativo por varias décadas.
- Los distintos partidos políticos nacionales.
- La iglesia progresista del sur andino ligada a los intereses campesinos y de desarrollo rural.
- Las federaciones campesinas como principal plataforma de presencia y lucha política. Entre otras organizaciones más pequeñas.

A inicios de los 80 Sendero Luminoso también ingresa al campo puneño. Su accionar se inicia en la zona sur de la región para extenderse luego al norte, zona de mayor presencia de empresas asociativas ganaderas creadas por la Reforma Agraria de 1968. El accionar de Sendero se extendió hasta iniciada la década del 90, pero a diferencia de otras regiones como Ayacucho y Cuzco, su incursión armada se vio obstaculizada por toda una gama de organizaciones sociales y políticas presentes y activas en la región.

La acción de Sendero Luminoso y la respuesta contrasubversiva del Estado estuvo centrada en combatir las organizaciones campesinas, la iglesia del Sur Andino, las ONGs y los grupos de izquierda legal. Así, el periodo de violencia política protagonizada por estos dos frentes terminó liquidando y quebrando las organizaciones sociales y políticas que se habían ido constituyendo en la región desde la década del 60.

A mediados de los 90, después de la guerra interna y de la crisis de los partidos políticos encontramos en Puno un escenario político fragmentado y débil. Si, hasta las elecciones de la primera mitad de los 90 encontrábamos aún algunos grupos de la izquierda sobrevivientes de la guerra, a mediados de esta

década la competencia electoral borró del mapa a estas organizaciones. Ya para esta época encontramos a los antiguos líderes locales, disputándose el control de los gobiernos locales, representando la mayoría de ellos organizaciones políticas independientes.

2.3 Las últimas movilizaciones en torno a la tierra

La actividad ganadera en Puno había caído desde la década del 50 como producto de la caída de los precios de las lanas y de los efectos de la sequía de esos años. Entonces, ya para la década de 1960 la descapitalización del campo era una evidencia más que palpable, lo cual, unido al sobrepoblamiento de las comunidades campesinas, la minifundización creciente de las tierras comunales y la poca productividad del ganado agudizó la pobreza de la población rural, desarrollando todas las condiciones para una nueva etapa de conflictos.

En estas condiciones sociales una reforma agraria era impostergable. El proceso iniciado por el gobierno de Belaúnde en 1963 no tuvo mayores efectos, recién con la reforma agraria de 1968 emprendida por los militares peruanos se sentirán cambios sociales profundos en el agro peruano.

La reforma agraria de 1968 quebró la estructura de poder político y económico del Perú, terminando de liquidar a los grupos de hacendados y terratenientes, que detentaban el mismo. Sin embargo, si bien la reforma agraria “afectó a la hacienda no se produjo el traspaso de la tierra a las comunidades” (Rénique, 2004: 169). En este sentido, la reforma significó una reconcentración de la tierra en Puno ya no en manos de los terratenientes y hacendados sino en manos de los administradores de las nuevas empresas asociativas.

La estructura de las haciendas, convertidas ahora en modelos empresariales de corte asociativo, no se afectó en absoluto; pues en el caso de Puno, éstas asociaciones empresariales obtuvieron el 89% de tierras y pastos de las haciendas y sólo un 2% de estos recursos pasó a manos de comunidades campesinas. En tal sentido, la tensión en el campo puneño no disminuyó si no que se agudizó, los campesinos comuneros se quedaron con la sensación de haber sido dejados de lado de la tan mentada reforma agraria.

Los efectos devastadores en la producción agraria por la sequía de 1983 y la inundación de 1985, significó un empobrecimiento cada vez más agudo del campo. En tal sentido, estaban dadas las condiciones para que la tensión social en el campo se hiciera explosiva.

El gobierno de Alan García, queriendo remediar las condiciones productivas del campo puneño, promulga en 1985 dos decretos que pretendían el reinicio de una reestructuración agraria. Sin embargo, estos decretos terminaran siendo letra muerta, por lo que, en mayo de 1987, los campesinos comuneros organizados en la FDCP protagonizaron movilizaciones violentas con el objetivo de tomar las tierras de las empresas asociativas, y lograr así, el tan ansiado reparto de tierras.

La historia de las movilizaciones lideradas por la FDCP no durará por mucho tiempo. En 1987 ésta Federación pacta un acuerdo de reestructuración con el gobierno central, por el cual se legalizaban la propiedad de las tierras tomadas anteriormente, sin embargo, éste pacto no se llega a cumplir. Por el contrario, el gobierno de García endurece su posición, anunciando a inicios de 1988 el fin del proceso de reestructuración, con lo que la transferencia de la tierra quedaba completamente cerrada. Dándose el inicio de una represión directa sobre los dirigentes de la federación. El accionar de Sendero Luminoso junto a la represión del Estado avalado en la lucha contrasubversiva terminó así por desarticular completamente a la Federación Campesina.

3. Estructura social de la región

3.1 Los grupos sociales

Dentro de la clasificación social que se hace de la región se otorga un especial interés a la cuestión racial y étnica tal como lo hace Bourricaud para la década del 50 y Tamayo para la década del 80 (Bourricaud, 1967; Tamayo, 1982). Si bien, las cuestiones raciales y étnicas se han ido diluyendo del espectro común de científicos sociales para determinar la pertenencia de un grupo a cierto estrato social, criterios como raza y lugar de origen persisten en el sentido común de las personas para la conformación de redes y grupos.

Ambos autores coinciden en considerar tres grupos sociales jerárquicos en la región: los mistis, los cholos y los indios. Esta clasificación corre paralela a una estratificación predominantemente racial y étnica de sus miembros: blancos, mestizos e indios². Tal como se puede observar en el siguiente cuadro un individuo se podrá colocar en una u otra clasificación de acuerdo a estos dos parámetros de estratificación:

	MISTI	CHOLO	INDIO
BLANCO	X		
MESTIZO	X	X	
INDIO		X	X

Así, una persona será considerada como misti, sólo si puede tener características raciales que lo identifiquen con el grupo blanco o mestizo. Ahora bien, ser un misti significa tener poder político o económico dentro de la comunidad, es decir, ubicarse en la cima de la jerarquía social. Los criterios raciales marcan así una jerarquía social. Por ejemplo, un indio puede llegar a tener poder dentro de su comunidad de origen pero nunca llegará a ser un misti a lo mucho llegará a ser considerado como cholo por los demás.

Sin embargo, los criterios raciales para identificar a una persona nunca son claros ni precisos, sobre todo, cuando se constata el enorme mestizaje que existe en el país, en este caso criterios más finos y toda una gama de diferencias –visibles sólo a los ojos de los interlocutores- pueden funcionar para colocar a una persona en una posición u otra. El problema no radica en la dificultad que supone definir a una persona dentro de una categoría sino lo que

esto conlleva. En un país con elementos coloniales, las personas deben ser “colocadas en su lugar”, para saber comportarse y dirigirse ante los demás. Nadie está libre de ser definido ni definir al otro, es lo primero que nos enseñan para relacionarnos entre unos y otros. Estableciendo así claros elementos de jerarquía social, exclusión y dominación.

Esta realidad social, analizada para la década de 1950, llevó a concluir a Francois Bourricaud que “en Puno no existe en sentido estricto ni castas ni clases sociales” (Bourricaud, 1967: 69) pues hay movilidad social y sus miembros se diferencian entre unos y otros por su condición económica y social. Pero al mismo tiempo, los grupos establecen diferencias excluyentes basadas en criterios de origen familiar y étnico, diferencias poco permeables, y por tanto, con escasa movilidad. En Puno estaríamos, entonces, ante una sociedad plural, pero también fragmentada, dominante y excluyente. Lo cual configuraría un escenario social con dificultades para establecer criterios comunes de pertenencia e identidad.

Sin embargo, la realidad social de los años 50 se ha ido transformando con la movilización social de las masas campesinas e indígenas por la educación y la migración hacia las grandes ciudades. Por esto las denominaciones de misti, cholo e indio hoy no se pueden aplicar en sentido estricto para establecer criterios de estratificación social en la región de Puno (ni en el resto del Perú).

A partir de la década de 1950 el ascenso de un nuevo grupo social en el escenario social de la región se hizo evidente. La emergencia de este tercer grupo, intermedio entre los polos indios y mistis, se evidenció con el crecimiento vertiginoso de la ciudad de Juliaca como centro de acopio y comercio. Este nuevo grupo, denominado cholo³, será el grupo campesino-indígena emergente que deja de ser campesino para convertirse en intermediario y pequeño comerciante. Décadas posteriores, con la extensión de la oferta educativa pública este sector incrementará su nivel educativo, accediendo a cargos públicos y a las profesiones liberales, espacios que anteriormente habían sido exclusivos del grupo dominante misti.

Esto supone que hoy estamos en Puno ante una sociedad meritocrática, ya que el sistema de castas ha sido superado por una movilidad social más fluida. Sin embargo, aún persisten nociones como la de “buena familia” para hacer referencia al origen de las personas, con lo cual, los grupos que han ido perdiendo su jerarquía social establecerían diferencias con aquellos grupos sociales que ascienden socialmente por la educación o los nuevos ejes de poder instalado en la región como el comercio. En tal medida, un grupo de familias tradicionales no habría dejado de ser parte de la elite provincial puneña (Diez, 2003) las cuales aún manejan criterios de exclusión para preservar su posición y poder social.

3.2 El sistema de poder

Los cambios sociales trajeron consigo la reestructuración del poder en la sociedad puneña. Hasta la mitad del siglo XX la estructura de poder y dominación de la sociedad puneña estuvo basada en un personaje clave: el

gamonal. Estos personajes detentadores del poder político y económico de la región, socialmente podían ser un misti o cholo, en este sentido, el gamonal podría ser el propietario de la gran hacienda de la zona, el rescatista de lana, el comerciante del pueblo o el que ejerce los cargos de poder político. Por lo tanto, el gamonal no siempre es el latifundista o terrateniente sino cualquiera que pueda tener “acceso a los principales instrumentos de poder: la tierra, la educación y los cargos públicos” (Tamayo, 1982: 153). El gamonalismo se basaba entonces en una situación de exclusión ya sea esta económica, política, social o cultural, y en base a ésta establecía una relación de dominación y poder.

Sin embargo, la conformación del poder que había estado basado en las grandes familias y en los hacendados se comienza a resquebrajar en la década de 1950 con el ascenso de nuevas familias mestizas y comerciantes. Esto unido al ascenso social de grupos campesinos y medios por medio de la educación y la reforma agraria de 1968 viene a desplazar a los hacendados y terratenientes de su posición de dominación, configurándose entonces, un nuevo espacio para la lucha por el poder local y regional (Diez, 2003). El ascenso al poder político de los hermanos Cáceres Velásquez es un ejemplo elocuente de lo que hablamos.

Con la reforma agraria de 1968 el gamonalismo perdió uno de sus principales pilares: los hacendados terratenientes. Sin embargo, la exclusión como principal elemento de fundamentación para el gamonalismo aún no ha sido superada. Las grandes masas rurales de Puno (y del resto del Perú) aún sobreviven en una situación de pobreza extrema, lo cual unido a un racismo que no ha sido superado, configura un escenario excluyente social y políticamente. Habría que preguntarse entonces si aún pervive el gamonalismo como una forma de relación social y política en el ámbito público, aún cuando ya no existan terratenientes que detenten el poder en el escenario social.

La apertura democrática de los 80, la inclusión de sectores sociales antes excluidos a la política nacional, el ascenso social de una clase media provinciana, etc. ha cambiando definitivamente el escenario social de Puno en la actualidad. Una mirada a los candidatos a las elecciones regionales del 2002 nos revela que el poder local aún mantiene algunos personajes de familias tradicionales, pero junto a estos hay otros de origen campesino. En tal sentido, los conflictos que hoy se vienen sucediendo pueden ser producto de una reconfiguración de poder local fragmentado desde los años 50.

II. Estudio de caso: Ilave, los problemas del poder y la democracia local

Los sucesos de abril del 2004, que dieron como resultado la muerte del alcalde provincial, tuvieron como principal escenario la ciudad de Ilave, capital de la provincia de El Collao y sede del gobierno provincial. Ilave, es considerada como la tercera ciudad en importancia de la región, después de Juliaca y Puno, no sólo por su actividad comercial creciente, si no además, por el crecimiento demográfico que ha experimentado en los últimos años. La población estimada para el año 2000 asciende a más de 55 mil habitantes, siendo el segundo

distrito más denso de la provincia de El Collao. Si bien el distrito de Ilave sigue siendo mayoritariamente rural, la ciudad ha crecido notablemente en estos años, actualmente cuenta con 35 barrios o asentamientos urbanos.

Desde décadas atrás, la ciudad de Ilave ha sido sede de una de las ferias comerciales más grandes de la región, lo que ha convertido a dicha ciudad en principal nexo entre las grandes y pequeñas ciudades de la zona. En efecto, uno puede comprobar la importancia y la magnitud de la feria de Ilave al llegar a esta ciudad los días domingos, la cual, no sólo ofrece productos de la zona, sino además, autos usados, artefactos, ropa y todo tipo de productos. Esta feria no sólo sirve para abastecer a los pobladores de los lugares cercanos si no también a los vecinos mercados regionales, principalmente por el intercambio de carnes y lanas, pues ésta cuenta con una de las principales ferias ganaderas de la región.

Como visitantes nos quedamos sorprendidos ante la magnitud que adquiere la feria ya que literalmente la ciudad se transforma en un gran mercado, los comerciantes convierten calles y avenidas de la ciudad en puestos comerciales, razón por la cual, resulta comprensible y previsible que uno de los pedidos más frecuentes de los pobladores hacia sus autoridades locales sea el ordenamiento comercial de esta feria.

La ciudad de Ilave se despierta los días domingos con un importante flujo de personas y actividades no vista los otros días de la semana. Así este día podía ser visto como el principal día de la semana en la ciudad pues alberga distintas actividades sociales, políticas y culturales de la zona. Entre el comercio y las actividades lúdicas, en este día se dan cita en la ciudad las diferentes autoridades y líderes locales, siendo éste el día y el lugar donde se aprovecha para poder contactarse con aquellos. Además, el día domingo es de mayor actividad en la sede del gobierno provincial, pues en las afueras y en el interior del local municipal se pueden observar una enorme cantidad de pobladores que acuden a éste por diferentes motivos e intereses.

La característica que nos presentaba la ciudad los días de feria llamó nuestra atención pues nos hizo recordar las particularidades de las sociedades rurales, que centran sus actividades comerciales, políticas y culturales en un día especial de la semana. A diferencia de las sociedades urbanas que especializan y dispersan sus diferentes tipos de actividades. Característica que no debería sorprendernos si tomamos en cuenta que Ilave y la provincia de El Collao cuenta con un importante número de pobladores rurales. Sin embargo, a partir de lo leído de la zona y de la importancia que había ido adquiriendo Ilave como ciudad habíamos creído encontrar otra realidad social; sin embargo, a partir de la visita y del trabajo de campo nos dimos cuenta que la ciudad de Ilave se presentaba como una especie de “pueblo grande”. Esta situación nos colocó ante una disyuntiva conceptual para poder describir y comprender mejor el escenario de los conflictos, pues ¿podríamos considerar como urbana o rural la ciudad de Ilave? Respondernos esta pregunta nos pareció importante y no sólo un mero ejercicio teórico, pues podríamos lograr con esto entender mejor las características particulares que podrían presentarse en la política local que necesitábamos observar.

De entrada no podíamos calificar como simplemente urbana a la ciudad de llave, aún cuando por su crecimiento urbano y los modernos servicios que ofrece nos podrían llevar por este camino. Y sin embargo, tampoco podríamos calificarla como simplemente rural aún cuando fuimos constando que cuenta con características sociales, económicas y culturales que la asemejan a las tradicionales sociedades rurales. Por lo tanto, la mejor salida que encontramos fue tomar el concepto de ciudad intermedia que teníamos a mano para poder clasificar de manera más fidedigna nuestro escenario local en cuestión. En el sentido que, como ciudad, llave combina características urbanas y rurales⁴.

Lo novedoso de tal categoría recae en las características sociales, económicas y culturales que adquieren estos espacios, y que en muy pocos casos se toman en cuenta para describirlos y clasificarlos. En este sentido, no es en vano que insistamos que la ciudad de llave cuenta con características rurales y urbanas intrincadas, pues la constatación de esto nos ayudará a comprender que el espacio político de la misma cuenta con un sentido distinto de actuación a un escenario mayoritariamente urbano o rural.

De esta manera, en llave se configuraría algo así como un escenario intermedio donde los poderes locales cuentan con características básicas de las sociedades rurales para implementar su poder y autoridad, como por ejemplo, el prestigio, basado en características adscritas a la persona que lo ostenta. Pero a la vez, el espacio político cuenta con mecanismos propios de las sociedades urbanas, ya no sólo para establecer criterios como la autoridad y la legitimidad de un líder, si no los mecanismos para ejercer los cargos a los que son designados, como por ejemplo, el juego electoral por el que deben atravesar los líderes locales para ocupar el sillón municipal.

Si bien, estamos conscientes que, no resulta admisible establecer criterios duales para describir cualquier realidad social (urbano-rural, moderno-tradicional), también afirmamos que estos pueden resultar ilustrativos a la hora de imaginar realidades concretas, distintas a las que uno cotidianamente vive. Así, llave podría ser vista como un pueblo grande o una ciudad pequeña que carga con todos los pro y contra de un pueblo y de una ciudad al mismo tiempo, tanto en los espacios sociales como en los espacios políticos y culturales.

1. Contexto socioeconómico del distrito de llave, capital de la provincia de El Collao

Como mencionamos líneas arriba el distrito de llave y la provincia de El Collao tiene una población preponderantemente rural.

POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE ILAVE

	1940	1961	1972	1993
POBLACIÓN TOTAL	29,928	41,040	31,161	48,054
URBANO (%)	6.16	10.42	20.47	29.66
RURAL (%)	93.84	89.58	79.53	70.34

Si bien, lo rural es predominante en la provincia, sus cifras relativas han ido disminuyendo en los últimos cuarenta años a razón de un crecimiento sostenido de la población y las actividades económicas propiamente urbanas. De esta manera, la disminución de la población rural y de la magnitud de la actividad agropecuaria ha ido a la par del crecimiento de actividades económicas como el comercio y los servicios.

El crecimiento de la actividad económica con respecto a los servicios nos estaría revelando dos cambios importantes en la zona: el primero, con respecto al crecimiento urbano como ya lo mencionamos; y el segundo, ligado al primero, el crecimiento de la actividad administrativa local, y por tanto, el aumento progresivo de la presencia del Estado en la zona.

Las características socio-económicas descritas hasta el momento nos estarían mostrando los tres principales grupos que estarían actuando en lo local: 1) los comerciantes, que jugarían como parte de la elite de poder económico, recayendo este papel sobre todo en los grandes comerciantes ganaderos; 2) los grupos de poder político ligado a aquellos que ocupan los cargos públicos y administrativos de la zona y; 3) los centros y comunidades rurales, que juega como grupo de población mayoritario, y por ende grupo importante de presión social. Más que tres grupos sociales estos pueden ser vistos como tres espacios de influencia que se interrelacionan dinámicamente entre sí. Justamente son estos tres grupos/ espacios los que, como veremos más adelante, fueron los principales protagonistas de los sucesos de abril del año pasado.

Sin embargo, a pesar del crecimiento económico y la importancia regional que ha experimentado la zona de estudio en los últimos 40 años los índices de pobreza de la provincia se han mantenido bastantes altos. Según el mapa de pobreza del Perú elaborado por Foncodes para el año 2000, la provincia de El Collao es considerada como pobre. Efectivamente, si volvemos a las cifras del Censo Nacional de 1993, podremos observar que el 73% de hogares de la provincia tenía Necesidades Básicas Insatisfechas, a más de diez años de esta medición, dudamos que las cifras hayan variado considerablemente.

Uno de los problemas de fondo en la provincia será entonces los enormes índices de pobreza, los cuales, han variado muy poco, a pesar del desarrollo comercial experimentado, pues éste, no se ha traducido en mejores condiciones de vida para la mayoría de sus pobladores.

Un vistazo a las condiciones productivas de la provincia nos puede dar una de las tantas explicaciones para la situación de pobreza generalizada. Ciertamente, si consultamos los datos del Censo Nacional Agropecuario para la provincia de El Collao inmediatamente podremos dar cuenta de las mínimas condiciones de subsistencia para la principal actividad económica de la provincia. Pues, la actividad agropecuaria enfrenta el grave problema de la minifundización de la tierra, lo cual unido a las condiciones poco favorables

para su producción y distribución, da como resultado la baja rentabilidad de la esta actividad.

Sin embargo, como veíamos en el Censo Nacional de 1993, la actividad comercial ha ido ganando terreno a la actividad agropecuaria, por lo que, el deterioro del agro no sería el principal factor que explique los altos índices de pobreza en la provincia, sino uno entre tantos otros. En este contexto conviene preguntarnos sobre las características de la actividad comercial de la zona. Si bien, no contamos con cifras que reflejen las condiciones sobre las cuales se desarrolla esta actividad en la localidad, un simple vistazo a la feria dominical y a la ciudad de Ilave nos ponen en evidencia dos características: primero, se trata de un comercio informal; y segundo, de un comercio de tipo minoritario. A estas características se une los amplios márgenes de actividad ilegal como el contrabando y el narcotráfico.

Al llegar a la ciudad de Ilave uno nota con sorpresa la cantidad de pequeños establecimientos que ofrecen gas envasado y petróleo o gasolina a bajos costos. Los locales de condiciones precarias venden estos productos al menudeo a lo largo de la principal avenida de acceso a la ciudad, ubicados cerca de la terminal de ómnibus que parten hacia las ciudades de Puno y Juliaca. No es raro ver que la mayoría de estos ómnibus partan a sus destinos cargados con más de uno de estos productos.

En efecto, el gas envasado así como los combustibles son traídos desde el vecino país de Bolivia, donde el precio de éstos no exceden la mitad de los costos obtenidos en el Perú, así, a pesar de ser vendidos muy baratos en la frontera, el comerciante puede reportar grandes márgenes de ganancia aún cuando estos corran con el peligro constante de las requisas y las coimas por ser productos de contrabando. Este caso sólo es un ejemplo de los múltiples que podemos encontrar en la provincia, pues recordemos, que El Collao no sólo comparte frontera con Bolivia, sino además, con Chile, y por medio de estos dos accesos hay un enorme flujo comercial de todo tipo de productos de contrabando.

La actividad comercial de la zona es creciente y efectivamente rinde mejores márgenes de ganancia que la actividad agropecuaria. Sin embargo, dentro de esta actividad también habrá que hacer diferencias, pues mientras están los grandes comerciantes, los de ganado por ejemplo (o los grandes contrabandistas), que podrán reportar grandes márgenes de ganancia, también se encuentran los pequeños comerciantes que ofertan los productos que ellos mismos producen en sus parcelas. En consecuencia, dentro de la actividad comercial también tendremos grandes diferencias entre los sectores más pudientes y los sectores que compran y venden sus productos para sobrevivir. En suma, si bien esta actividad rinde mejores índices de ganancia estos aún no se traducen en mejores condiciones de vida para la mayoría de la población.

Ahora bien, a pesar de la situación de pobreza tan extendida, uno no puede dejar de observar que la estructura social de la ciudad ha cambiado. Si uno mira la conformación del bloque de poder burocrático se puede confirmar que, en los últimos quince años, por lo menos, los sectores de origen campesino

han ascendido socialmente. Esta movilidad social ha sido producto del acceso a la educación superior y al aparato burocrático estatal, mejorando así, los niveles ingresos de algún sector de la población, pero que en general, aún resultan muy escasos para que sus variaciones den como resultado un mejor nivel de vida para la mayoría de los pobladores. Resulta comprensible entonces, porque, hay una percepción extendida en comprender los cargos en la administración pública como una suerte de privilegio, llegando a enfrentarse abiertamente por ocupar un espacio en este pequeño sector⁵.

2. La Institucionalidad en juego

En los hechos de abril del 2004 se pueden ver varias características que podrían hacer pensar en una ausencia del Estado pues, se rompe el monopolio del uso de la violencia desde el inicio del conflicto, se desconocen sistemáticamente todos los mecanismos legales para la resolución del conflicto, se hace uso y abuso de la justicia cometiendo un crimen del cual aún no hay ningún culpable. Sin embargo, más que ausencia del Estado lo que ocurrió en llave fue la “enorme ineficiencia de las agencias estatales [...] y la ausencia del Estado puede replantearse y entenderse más bien como ausencia de ciertos principios básicos que son inherentes al estado moderno” (GPC, 2004a: 11).

Habría que preguntarse, entonces, cómo se da la presencia del Estado Peruano, sobre todo, en zonas mayoritariamente rurales como la provincia de El Collao. En efecto, el Estado Peruano se ha hecho presente en casi todo el territorio con instancias como la educación y la salud que en los últimos 50 años han duplicado su cobertura a nivel nacional, por otra parte, se ha hecho presente con los programas nutricionales de asistencia social que recién a partir de la década de los 90 se han hecho lo suficientemente extensivos. Sin contar con los otros tipos de programas sociales como aquellos destinados a la ayuda agropecuaria, obras de infraestructura, etc.

Por otro lado, a partir de la década de 1980 con la instalación de bases contra subversivas en aquellas zonas consideradas como plausibles de subversión, asentaron la presencia represiva del Estado⁶. Sin embargo, la lucha contra subversiva significó en la práctica el desconocimiento sistemático de los derechos civiles y políticos de los pobladores de las zonas intervenidas configurando un espacio social y político autoritario y violento. En tal sentido, no es la ausencia de Estado lo que se puede confirmar en El Collao y en sus zonas rurales a lo largo de varias décadas, si no mas bien la presencia de un Estado que cubre precariamente las necesidades básicas de la población, así como, la presencia de un Estado de corte asistencialista y represivo que poco tiene que ver con la conformación de un Estado democrático y moderno.

A la par, en la provincia se constata la presencia de una joven institucionalidad estatal a nivel local. Pues procesos como la municipalización que podrían asentar criterios de un juego político democrático cuentan con poco más de 20 años de vigencia ininterrumpida. Y más bien lo que se encuentra es la presencia activa de organizaciones y autoridades locales que cuentan con características propias de una política comunal –asentadas en criterios rurales y tradicionales. Un claro ejemplo de lo que hablamos es la organización de los

tenientes gobernadores, que si bien son designados por la autoridad estatal, sus bases de legitimidad y delimitación de sus funciones las obtienen de la misma comunidad que representan. Esta institución que configuraría un híbrido entre lo comunal y lo estatal es una de las que cuenta con mayor legitimidad y presencia en una zona predominantemente rural como la provincia de El Collao.

Hay que aclarar que la presencia extendida y efectiva de instituciones de corte comunal, no significa que, éstas no aporten en absoluto a los criterios democráticos que pueden ser profundizados por las instituciones y organizaciones de un estado moderno, al contrario, en muchos casos se ha visto a la organización comunal como la predecesora de formas democráticas de participación directa.

La base de la pirámide del poder estatal está conformada por toda una red de instancias como las municipalidades provinciales, distritales y de los centros poblados menores junto a una trama de instancias designadas por el gobierno central. Si bien todas estas instancias pertenecen formalmente a la estructura estatal las autoridades de circunscripciones territoriales menores como caseríos, anexos o comunidades, ubicadas en la base social de los asentamientos rurales no poseen criterios claros de elección y de funciones, respondiendo más a criterios comunales que estatales.

CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL	AUTORIDADES DESIGNADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL	AUTORIDADES ELEGIDAS POR VOTO UNIVERSAL
DEPARTAMENTAL/ REGIONAL	PREFECTO	GOBIERNO REGIONAL
PROVINCIA	SUB-PREFECTO	ALCALDE PROVINCIAL
DISTRITO	GOBERNADOR	ALCALDE DISTRITAL
ANEXOS/ CASERÍOS/ COMUNIDADES	TENIENTE GOBERNADOR	ALCALDES DE CENTROS POBLADOS MENORES/ PDTES COMUNALES*

*Estas autoridades no son elegidas por elecciones generales

La designación de los tenientes gobernadores, por ejemplo, está a cargo del inmediato superior como el gobernador, sin embargo, la elección de la persona que asumirá el cargo se decide en la comunidad o en los municipios menores. Por otro lado, la designación de éste funcionario no siempre cumple estos requerimientos tradicionales, ya que, puede ser impuesto por la autoridad superior así como permanecer en el cargo de manera indefinida, de la misma manera, sus funciones no son claras y se establecen de acuerdo a los requerimientos de la misma comunidad (Damonte, 2000). De tal suerte que, la función e importancia del teniente gobernador recae en la forma como éste se relaciona con las instancias superiores de gobierno y cómo adquiere protagonismo para adquirir ciertos beneficios para la comunidad que representa, de este modo, la legitimidad del cargo y de la persona que lo ocupa se gana en la práctica como interlocutor eficiente entre la comunidad y el exterior (Estado, Ongs, instituciones, etc.) Lo cual hace que muchas veces su función se superponga a las funciones de otras autoridades a nivel comunal, como por ejemplo, el presidente comunal, el presidente de la junta de regantes, etc.

Las autoridades de municipios menores elegidas por voto o aquellas elegidas por mecanismos tradicionales como los presidentes comunales, son la otra base de poder comunal, y tal como sucede con el teniente gobernador sus funciones no son claras ni específicas. Las funciones de los presidentes comunales no sería otra que la de representar a su comunidad actuando como interlocutor entre ésta y las instancias de negociación externa, en este sentido, sus funciones no se diferenciarían de la de los tenientes gobernadores.

En las instancias superiores, no hay menos problemas, derivados ya no de la poca claridad de las funciones, si no de un proceso de reciente implementación, que no ha permitido que los actores aprehendan y hagan suyos los mecanismos participativos y democratizadores de la función pública. Por tanto, el proceso de municipalización reciente, ha instalado en el ámbito local una institución estatal nueva, que en la actualidad es el principal generador de conflictos, basado sobre todo en el cuestionamiento de la gestión poco transparente de sus autoridades electas⁷.

Las actuales funciones de los gobiernos locales se han venido implementando recién a partir de la reforma municipal de 1979, de la misma manera, la elección de autoridades municipales por voto universal se ha implementado recién en 1963 (interrumpida durante 1968-1980, periodo de dictadura militar), lo que ubica a ambos procesos como experiencias novedosas en el ámbito local. Antes de las reformas los municipios se concibieron como meros apéndices del gobierno central, de tal suerte que, la centralidad del poder estatal se tradujo en una suerte de “expropiación de funciones, competencias y recursos económicos propios de los gobiernos locales [...] que sumados a la designación de alcaldes y regidores por el Ministerio del Interior colocaba en una situación de dependencia a los órganos de gobierno local” (Chirinos, 1991: 179-180).

Con la reforma municipal de 1979 se rediseñó el aparato estatal devolviendo competencias a los órganos de gobierno local, así como, la competencia de desarrollo local basado en la participación de los ciudadanos a través de la elección de sus autoridades locales. Desde ese entonces, se han agregado en el papel nuevas competencias a los gobiernos locales y a la participación ciudadana, como la transferencia de recursos y competencias de los programas sociales, para los municipios; y derechos de información, revocatoria de autoridades e implementación de instancias de coordinación local, para los pobladores. Sin embargo, estas competencias se han venido cumpliendo medianamente, puesto que, su implementación ha tenido que ver más con la voluntad de la autoridad elegida y la organización y presión que puede ejercer la sociedad civil organizada.

Por ejemplo, en un estudio comparativo que hace Luis Chirinos para fines de la década de 1980 entre dos municipalidades de ciudades intermedias como Ilo y Juliaca, el autor encuentra dos estilos de administración completamente distinta, a pesar de contar ambas con la misma base legal de funcionamiento. Así, para Juliaca encuentra un creciente personalismo del alcalde a tal punto que los regidores “carecen de información sobre los aspectos económico-financieros de la municipalidad [...] Este personalismo y caudillismo de los

alcaldes llevó a una política básicamente clientelista en su relación con la administración. La consecuencia ha sido un ejercicio del poder concentrado en el alcalde y un reducido grupo de altos funcionarios”. El caso de Ilo en cambio es completamente distinto pues desde la municipalidad a través de varias gestiones se ha “intentado plantear nuevos modelos organizativos [...] que hagan un uso adecuado y eficiente de los instrumentos que la nueva legislación otorga a las municipalidades” (Chirinos, 1991: 185-186).

No es casualidad que nos refiramos al caso de la municipalidad de Juliaca, pues podríamos encontrar entre ésta y el municipio de El Collao algunas semejanzas. Primero, se encuentra ubicada en la región de Puno al igual que nuestro municipio en cuestión; y segundo, el municipio estuvo monopolizado por el Frenatraca, partido político regional que se asentó por varias décadas en la zona. El Frenatraca se erigió como fuerza política a partir de la década de 1960 y que se convirtió en referente de la nueva elite de poder comercial que surgía en la zona comercial de Juliaca (provincia de San Roman). Salvando las diferencias entre el proceso político de Juliaca e Ilave, al igual que en la primera en ésta última la gestión del gobierno provincial estuvo dirigida por el FIJO desde el inicio de la creación de la provincia y tal como el Frenatraca se convirtió en el referente político de la nueva capa social emergente de la provincia, capa social de origen campesino y ligada a la administración pública.

Por otro lado, si bien no contamos con un estudio como el de Chirinos para el caso de Ilave, se sabe por algunos estudios anexos y por referencias personales que la gestión de Gregorio Ticona, alcalde provincial por dos periodos consecutivos, estuvo basada en un estilo personalista y clientelista que, en buena medida “permitieron la eficacia y el éxito político de su organización” (Pajuelo: 2005; 85). Estilo de conducción política bastante extendida en la política local, pues no sería privativa de este personaje u otros líderes, muy por el contrario, el estilo personalista sería aquel que la población exige de sus autoridades locales para considerarlas como competentes y legítimas. Personalismo que se traduce a distintos niveles de relación entre el Estado y la sociedad, desde las peticiones para que el alcalde solucione a cada uno de los pobladores su falta de trabajo hasta aquellos asuntos de índole comunal. Traduciéndose en una relación cara a cara con la autoridad como único mecanismo efectivo para lograr acuerdos con la entidad estatal.

En la entrevista que mantuvimos con el ex alcalde José Antonio Maquera éste se refirió a que la población siempre espera que sea el mismo alcalde el que vaya a las comunidades y pueblos a escuchar las demandas de la población, recordaba cómo él en su calidad de teniente alcalde había tenido que enfrentar más de una vez la desazón que producía en la población cuando no iba acompañado del alcalde provincial a las comunidades. La lectura que podemos hacer de esta situación es que la población siente que no es lo suficientemente atendida por sus autoridades si no es la máxima autoridad la que los escucha.

Esta situación no está tan lejana de lo que se puede observar en otros escenarios nacionales en los que continuamente se solicita la presencia del presidente para solucionar conflictos de distinta magnitud. En el transcurso del conflicto de abril pasado se vivió una situación similar, los pobladores ilaveños

pidieron una u otra vez la presencia de los altos mandos del ejecutivo, aún cuando se hicieron presentes representantes de la Defensoría del Pueblo o del Congreso la población siguió sintiendo que sus demandas no eran escuchadas ni tomadas en cuenta por las máximas autoridades, razón por la cual la sensación de olvido y frustración se profundizó cada vez más. Nos preguntamos qué hubiera ocurrido si efectivamente se hubieran presentado, a los días de iniciado el conflicto, los altos mandos del ejecutivo. Estamos casi seguros que muchos de los actos extremos se hubieran podido evitar.

Todo esto nos deja la sensación de lo difícil que resulta para los ciudadanos confiar en los mecanismos institucionales de resolución de conflictos. Y lo que perdura es la idea que los compromisos y acuerdos sólo se pueden cumplir por un pacto de caballeros, por la palabra dada otorgada por la máxima autoridad, pues su voluntad sería lo único que garantice que los acuerdos terminen por hacerse realidad. Lo que configura finalmente un escenario de fragilidad y debilidad institucional que no aporta al desarrollo de un proceso democrático moderno.

3. llave: la política y los políticos locales

La provincia de El Collao como circunscripción territorial fue creada a fines de 1991, a partir de este año la ciudad de llave se convirtió en la capital provincial, implementándose el gobierno de la provincia en esta ciudad a partir de 1992. La vida política de llave crece sustancialmente a partir de este año, pues las disputas por el poder del gobierno provincial hacen resurgir la figura de muchos antiguos líderes locales, los cuales reaparecen en la arena electoral. Desde 1992 hasta el 2002 Ticona –antiguo líder de la Federación Campesina- y sus allegados ocuparon el cargo municipal, monopolio que fue desbaratado en las elecciones que llevaron a Cirilo Robles Callomamani al sillón municipal, culminado así, un ciclo de diez años de estilo y conducción de un grupo político constituido en el seno del gobierno provincial.

Durante una década de gobierno provincial Gregorio Ticona y otros líderes locales constituyeron el FIJO –Frente Independiente Juntos por Obras- como movimiento político local. Éste llegó a su máximo esplendor el año 1998, cuando se instaura como movimiento político regional después de lograr ganar varias alcaldías provinciales y sobre todo la alcaldía provincial de la ciudad de Puno, la más importante de todas. Sin embargo, pocos años después éste movimiento desaparece de la escena política regional, debido al escándalo político protagonizado en el 2000 por Gregorio Ticona, su principal figura. Ya para el año 2002, el FIJO no aparece en el mapa electoral de la región, tanto así que, el sucesor de Ticona en la alcaldía provincial de El Collao, José Antonio Maquera, se presenta a la reelección del gobierno provincial con el nombre de otro movimiento político: Poder Democrático Regional. Concluyendo así un ciclo de poder municipal local.

La corta vida del FIJO nos ejemplifica el inmediateismo de los movimientos políticos actuales que transcurren la arena electoral sin ninguna trascendencia, porque tal como aparecen en un proceso electoral al próximo pueden desaparecer de acuerdo a los cambios que se presenten con los líderes que

conforman una y otra tienda política. Así, los cambios de siglas y de partidos ocurren una y otra vez; y lo que, permanece son los nombres de líderes que aparecen como representativos y que se prestan una y otra vez las siglas de un grupo o partido político para llegar a la administración pública. Configurándose así, un escenario propicio para la presencia de caudillos.

De esta manera, se evidencia lo endeble que resulta una política partidaria que no cuenta con mayores garantías que la trayectoria personal de sus líderes del momento, sin posibilidad de construir un discurso y una opción política de más largo plazo. Lo cual, no sería privativo de la situación política local, si no, que es una situación que se hace extensiva a la política peruana en general, en la que pululan grandes cantidades de pequeños partidos y outsiders.

La carrera política de Gregorio Ticona es elocuente de los innumerables saltos políticos que puede protagonizar un líder local representativo. Este personaje, antiguo militante de las izquierdas de los 80, a mediados de los 90 se transformó en un candidato independiente, de ahí su paso político transcurrirá por diferentes tiendas políticas⁸ siempre con la visión de quién o qué grupo le podría asegurar un lugar en el poder público. La pregunta que de inmediato surge es ¿por qué los pobladores lo siguen eligiendo? Se nos ocurre como respuesta que, a los electores poco les importa el partido o movimiento político por el cual llegan sus líderes al poder, pues lo que prima es la persona que llega al cargo y no la agrupación política.

Sin embargo, la historia política local no se inicia en 1992 con el gobierno provincial de El Collao, en Ilave como en el resto de la región de Puno hubo en los años 80 una densa red de organizaciones sociales y políticas que actuaban sobre todo en el área rural. La Federación Departamental de Puno (FDCP) creada a fines de la década de 1970 se constituyó como la principal base gremial campesina del departamento y en la principal protagonista de los movimientos sociales de la década del 70 y 80. A fines de los 70 se creó a su vez la Federación Distrital de Campesinos de Ilave la cual también protagonizó pequeños sucesos de expropiación de tierras a mediados de los años 80.

Tal como vimos para el caso de la región de Puno en Ilave estuvieron presentes la Iglesia Católica del Sur actuando bajo la lógica gremialista y unida a los grupos políticos de izquierda. Así como las agrupaciones de izquierda radical y moderada. Tal como para otras regiones en Ilave la principal plataforma de lucha política por estos años se dio principalmente en el gremio campesino, razón por la cual, encontramos que muchos de los actuales líderes locales se iniciaron en la política partidaria en este espacio, ya sea como parte de la Federación Campesina, como parte de la Iglesia, o como autoridades locales de su comunidad de origen.

En los 90 sin embargo, la crisis de los partidos y la violencia política entre otras razones, determina el decaimiento y eventual desaparición de las organizaciones gremiales y de toda la densa red de organizaciones sociales y políticas de la década anterior; y con esto, se da inicio a la emergencia de la política denominada independiente que durará hasta la actualidad.

4. A manera de mapa político local

Nos planteamos como objetivo del trabajo de campo⁹ la realización de un breve bosquejo de la política local. En este sentido, quisimos ubicar dos elementos principalmente: primero, los espacios que podían representar fuentes de poder local y; segundo, ubicar las trayectorias políticas de cada uno de los líderes identificados como representativos en la política local actual.

4.1. Los espacios de poder

Hemos identificado dos espacios de poder que juegan en la dinámica de la política local de Ilave: el primero, y que me parece de mayor relevancia por el grado de importancia que adquiere y por los recursos que puede movilizar, es el Municipio Provincial; y el segundo, importante por su capacidad de presión, es la reunión de los tenientes gobernadores. Ligados a estos dos espacios se conglomeran las diferentes organizaciones políticas y sociales de la zona, los partidos políticos, los medios de comunicación –que también pueden jugar como un poder independiente- y las distintas autoridades distritales y comunales.

El municipio provincial de El Collao

El municipio provincial de El Collao inicia su actividad institucional en el año 1992. Esto significó en la práctica que se transfirieran mayores recursos para la localidad, lo cual se vio plasmado en obras de infraestructura –más visible para la zona urbana- y con esto el crecimiento de la ciudad de Ilave que se transformó en capital de provincia. Para sus pobladores constituirse como capital significó poder desarrollar el ansiado crecimiento económico y social esperado por décadas. Esto se tradujo en términos prácticos en mayores y mejores servicios convirtiendo a Ilave en una ciudad atractiva a los sectores rurales y de las ciudades aledañas.

La ampliación de la zona urbana significó a su vez mayor demanda de servicios, lo cual se instauró como bandera de batalla del municipio provincial recién instalado. Así, obras como el terminal zonal de ómnibus, el local del Concejo Provincial y el coliseo cerrado constituyen los símbolos de diez años de política municipal liderada por Gregorio Ticona y el FIJO.

Por tanto, para muchos de los pobladores la gestión de Ticona representa el desarrollo de la ciudad y de la provincia, desarrollo que fue decayendo en la gestión de José Antonio Maquera, y que se vio truncada con la gestión de Cirilo Robles Callomamani en el 2002. Percepción que se confirma cuando las obras concebidas como importantes no se llegaron a concretar en la gestión de éste último¹⁰.

DIRECCIÓN DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DE EL COLLAO

Años de gobierno	Alcalde provincial	Partido/ movimiento político
1992-1995	Gregorio Ticona Gómez	Izquierda Unida-PMR
1995-1998	Gregorio Ticona Gómez	Frente Independiente Juntos

		por Obras (FIJO)
1998-2002	José Antonio Maquera	Frente Independiente Juntos por Obras (FIJO)
2002-2004	Cirilo Robles Callomamani	Unión Regional por el desarrollo
2004-2006*	Miguel Flores Chambi	Fuerza Democrática

*Elecciones complementarias

FUENTE: *Ilave Electoral. Asociación Civil Transparencia*

Entonces, no resulta fácil para los pobladores desligar el crecimiento de la ciudad y su desarrollo del protagonismo de líderes locales como Ticona, por lo que, en más de una ocasión manifiestan en la actualidad que esperan que éste personaje regrese de su “exilio político”¹¹ como una especie de salvador.

Gregorio Ticona con un estilo político sumamente personalizado estableció así un tipo de liderazgo carismático, encarnando el poder y la autoridad en su propia persona, por lo que, no resulta fácil que el caudal político capitalizado por él se traspase a sus seguidores como J. A. Maquera por ejemplo, aún cuando los estilos políticos y la gestión desde el municipio se mantuvieran.

“Sí volvería a participar con Gregorio Ticona porque con él había obras... no todos los del FIJO son así... no todos son iguales (...) No es lo mismo José Antonio Maquera que Ticona a pesar de ser del FIJO”
(Entrevista N° 3)

Además de las obras de infraestructura, la gestión de Ticona y el FIJO instauró como parte de la política municipal, la dotación de fondos anuales a las municipalidades de centros poblados y la participación de la población en los asuntos públicos por medio de asambleas abiertas¹². Lo cual, le permitió establecer una marcada dependencia de los gobiernos locales menores con el municipio provincial, pues la dotación de estos recursos no tenía mayores criterios que la voluntad del alcalde provincial para ser otorgados; pero a la vez, le permitió renovar la legitimidad de su gestión acercando a la población a los asuntos públicos. Ticona copió en buena medida las formas políticas tradicionales de las asambleas informativas y deliberativas, formas de participación muy extendida en la política comunal.

En la memoria de muchos se encuentran estas líneas de acción como parte de sus derechos adquiridos, por lo que, cualquier intento por romper o truncar estos mecanismos supone un grave atentado a sus derechos. Esto hace prever que difícilmente se pueda romper con un estilo político instituido por Ticona y el FIJO por una década. El craso error de Robles Callomamani –alcalde asesinado públicamente- fue precisamente pretender romper con estos pactos y alianzas constituidas en anteriores gestiones municipales, generando el descontento generalizado de una población que sentía sus derechos pisoteados¹³.

Para Gregorio Ticona y el FIJO ser parte directriz del gobierno provincial significó constituirse en el poder local, pues, este espacio les otorgó un lugar desde donde podían decidir sobre recursos públicos, y así generar una red de

concesiones a favor de aquellos leales colaboradores. Debido a que, muchos de los mecanismos instituidos para la realización de cualquier obra recaen en la voluntad expresa de la autoridad competente, en este caso en el alcalde provincial y sus más cercanos colaboradores.

Por otra parte, ser parte de la burocracia estatal (en este caso del municipio provincial) supone colocarse en una posición privilegiada, sobre todo, cuando se trata de una sociedad con enormes carencias y desigualdades como la ilaveña. Los privilegios ya no sólo se evalúan en términos económicos, si no además, en términos de poder decidir sobre lo mínimo indispensable para conseguir alguna ventaja frente a otro, desde la aceleración de trámites documentarios hasta un posible puesto de trabajo dentro del municipio.

En este sentido, ser parte de la política local y con capacidad de decisión desde la gestión pública municipal, siempre supone reconocimiento y prestigio. No por casualidad, en más de una ocasión, ser alcalde, regidor o funcionario público lleva a grandes batallas campales entre facciones y personas interesadas en ocupar un sitio en este espacio de poder.

Los tenientes gobernadores

Los tenientes gobernadores constituyen uno de los pilares del poder local, enmarcados en la política comunal y no estatal, a pesar de ser parte de la estructura de esta última. Se dice que son parte de una política comunal porque la forma de su elección, las funciones que realizan, los símbolos de poder y estatutos que ostentan, etc. hacen recordar a las autoridades tradicionales de las sociedades rurales de los andes peruanos como los varayoc.

En la provincia de El Collao encontramos 329 comunidades rurales representadas por estas autoridades. Estas autoridades junto a los presidentes comunales y los alcaldes de municipios menores son las autoridades más cercanas a la población rural, la relación que establecen con estos pobladores en muchos casos es de cara a cara y su nivel de influencia y liderazgo es muy grande.

Por esto mismo la reunión de los tenientes gobernadores constituye un espacio en el que la política local adquiere relevancia y poder. No por casualidad, muchas de las movilizaciones o acuerdos de consenso se toman en este espacio y no son pocos los líderes locales que acuden al mismo como forma de ganar presencia ante los pobladores de las comunidades rurales. Así, si una organización o líder local desea proponer determinada acción colectiva definitivamente tendrá que acudir a este espacio de reunión con el fin de garantizar la colaboración de estas autoridades comunales.

Pudimos observar un ejemplo de esta situación en nuestra corta estadía por la ciudad de Ilave. El día que llegamos a la ciudad se realizaba una movilización por el alza de pasajes, hecho que provocó la toma de la terminal de ómnibus de la ciudad por organizaciones juveniles. Las cuales, con el fin de contar con el apoyo de los tenientes gobernadores y con esto de la movilización de la

población rural si llegaba el caso, se acercaron a la reunión de los tenientes gobernadores para informar sobre sus acciones y sus perspectivas futuras de lucha.

Los tenientes gobernadores capitalizaron su presencia y capacidad de movilización y presión a partir de los sucesos de abril del 2004, donde fueron los principales protagonistas de los hechos. Estas autoridades junto a los presidentes comunales y alcaldes de municipios menores fueron las principales fuentes de organización y movilización en los días que la ciudad de Ilave estuvo prácticamente sitiada. Sobre la base de esta experiencia previa, los tenientes gobernadores para inicios de este año eligieron por primera vez a un Presidente, persona que representaría a las 329 autoridades bajo este cargo y estaría a cargo de la función de presidir las reuniones informativas y deliberativas que tuvieran. Se puede vislumbrar, que se inaugura una nueva etapa de la organización de estas autoridades, las cuales, basadas en su experiencia exitosa han logrado posicionarse como un grupo con enorme capacidad de presión.

Otros actores de la escena política local

Estos dos espacios de poder se relacionan con las organizaciones y partidos políticos locales. Las más influyentes de las primeras son la Federación de Comerciantes, la Central Única de Barrios, la Central de Organización de Mujeres, el Frente Amplio de Jóvenes, entre otros. De una u otra forma cada una de estas organizaciones se acerca en su momento a cada uno de estos espacios de poder, ya sea con sus demandas o para pedir la colaboración por su capacidad de movilización.

Por otro lado, si bien, los partidos políticos existentes en la zona son numerosos, estos tienen poca presencia efectiva en la política local. Como decíamos anteriormente lo que se encuentra como más representativo son los nombres de líderes locales y no tanto la tienda política con la que estos concurren a las elecciones o a las movilizaciones. La presencia de los partidos políticos de distinto nivel revive y se fortalece durante la época de elecciones pero estos no tienen una vida partidaria constante, por lo que, en otras épocas desaparecen de la escena local.

La presencia del FIJO, antes de su desaparición de la escena local en el 2002, constituye la excepción a esta regla, aunque hay que recalcar que su presencia se debió precisamente a su directa ligazón con la gestión del gobierno local y no tanto por una vida propia. Sin embargo, éste constituyó en su momento lo más claro de la política partidaria local. El FIJO logró reunir bajo una misma bandera a distintos líderes locales, de esta manera este movimiento político, como su mismo nombre lo dice, se constituyó como un frente de organizaciones y personas con distintos perfiles políticos, interesadas en llevar a cabo una gestión municipal eficiente. Como bien nos dice uno de nuestros entrevistados, antiguo militante del FIJO, éste movimiento “no tenía un principio filosófico”, si no que, era una agrupación que se proponía hacer obras. En efecto, las personas ligadas en su momento al FIJO también formaron parte de la gestión municipal, aún hoy, cuando el FIJO ha desaparecido del mapa

político local, varios pobladores relacionan a los funcionarios públicos con militantes de este movimiento político.

Bajo esta perspectiva practicista y de corto plazo resulta difícil que un movimiento político como éste pueda perdurar más allá de la política municipal que en su momento le dio origen. Así, una vez fuera del poder y con su principal líder involucrado en actos de corrupción resulta casi inevitable el debilitamiento y eventual desaparición del FIJO. Sin embargo, muchos de los antiguos militantes del movimiento aún creen que éste puede volver a tomar fuerzas bajo el liderazgo de José Antonio Maquera, ex alcalde provincial por esta agrupación, y así reaparecer en la escena política local y en la dirección del municipio. Habría que ver si en las próximas elecciones logran reaparecer como parte de la política local.

Por otro lado, se encuentran los medios de comunicación que en el caso de la ciudad de Ilave constituyen uno de los principales medios de poder y de presión sobre la política local y la agenda pública. En la ciudad de Ilave el medio de comunicación de mayor llegada e influencia es la radio. En esta ciudad existen 7 emisoras de radio, las cuales se encuentran en categoría de ilegales, pues, ninguna de ellas cuenta con la licencia de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Comunicaciones. Uno de los dueños y principales periodistas locales del medio más influyente de la zona nos contaba que su radio pidió la licencia hace ya 8 años y hasta el momento no la han podido obtener por una serie de trabas burocráticas.

Una de las radios más antiguas e influyentes de la ciudad es “Radio San Miguel”, la cual funciona desde 1987. Esta emisora radial cuenta con un programa periodístico por las mañanas, el cual es dirigido por los periodistas y propietarios del medio, los cuales, fueron protagonistas de los sucesos de abril del 2004, pues, desde, su emisora se vinieron denunciando presuntos actos de corrupción de la gestión municipal de Cirilo Robles, y en las movilizaciones no se dejó de informar ni de llamar a la población para que se sume a la protesta. Actuación que provocó que uno de ellos fuera implicado en el asesinato público del alcalde Robles.

El perfil que adquiere cada mañana el programa dirigido por estos dos hermanos es de denuncia y fiscalización de la labor del municipio generando más de una vez polémica con los vecinos y líderes locales, los cuales, acuden presurosos al programa para contestar denuncias en su contra o hacer ellos mismos diferentes reclamos. El micrófono del programa se encuentra medianamente abierto para aquellos que se acercan a la emisora, fenómeno que llamó nuestra atención pues esto ya no se ve en las radios grandes, al menos no en la magnitud vista en esta ciudad, pero que, es común encontrar en las radios locales de Ilave. Lo cual nos deja la sensación que la llegada a los medios y el acceso a estos es más democrática que en las ciudades grandes. Sin embargo, es una sensación que necesitaría ser confirmada por otras experiencias.

Si bien los dos hermanos no se consideran detractores acérrimos de cualquier gestión municipal, consideran que su labor es informar a la población, lo cual,

vienen cumpliendo a cabalidad ya hace muchos años. Es así, que en un primer momento fueron opositores de la gestión de Ticona, pero después de la primera gestión se aliaron a éste, pues se unieron al FIJO y a la gestión municipal ocupando cargos de confianza¹⁴, ya que, consideraron que se hacían obras en esta gestión municipal.

En la ciudad de Ilave se encuentran además otras dos radios importantes que cuentan con un espacio periodístico de información y debate. Una de ellas, la radio Armonía está dirigida por un dirigente de la UNCA (Unión Nacionalista de Comunidades Aymaras). Desde su tribuna matutina este personaje local despotrica en aymara contra todos los líderes locales, el estilo de conducción de su programa se tiñe así de adjetivos duros e insultantes para todos aquellos que no estén de acuerdo con sus planteamientos. Sería interesante saber que tanta simpatía puede lograr un personaje como éste, sin embargo, suponemos que por pregonar su marcada identidad étnica, dirigiendo la totalidad de su programa en aymara, puede lograr cierta simpatía en los sectores de la población que se consideran a sí mismos como aymaras, “depositarios de una cultura milenaria y combativa”. Las crónicas que se hicieron de los sucesos de abril del 2004 mostraron cómo desde las emisoras de radio en Ilave se azuzó a la población rural en aymara. Si bien, no sabemos a ciencia cierta que este personaje fuera uno de los responsables directos en los sucesos de abril del 2004 fácilmente podemos imaginar que éste no estaría lejos de exacerbar los ánimos de una población movilizada con los adjetivos más reacios y brutales.

4.2 Trayectoria política de sus actuales líderes locales

Cuando uno se acerca a la trayectoria política de los líderes de la ciudad de Ilave confirma los cambios que Alejandro Diez encuentra para la política regional puneña. En efecto, la conformación del poder político, hoy se encuentra más diversificada de lo que podríamos haber encontrado décadas atrás, pues existe, una presencia notable de dirigentes de origen campesino, que por su ascenso económico o político, lograron sitiarse en este espacio de poder (Diez: 2003, 64).

En Ilave, encontramos que, la mayoría de los líderes que hoy se mueven en la política local son de origen campesino y, que su vida política transcurrió por diferentes frentes de movilización social, lo cual, les otorgó una imagen pública para posicionarse como representativos, y así, animarse a lanzarse a la política electoral.

Efectivamente, hay una percepción generalizada que Ilave es una de las ciudades “más indias” de la zona, en el sentido que, fueron los campesinos los que coparon desde el inicio la dirección y gestión del municipio provincial, y desde éste lograron que la ciudad se desarrollara y creciera logrando superar a ciudades tradicionales como Juli, anterior capital de provincia¹⁵.

Lo cierto es que el reemplazo de los antiguos poderes locales no estuvo exento de algunas dificultades. Uno de nuestros entrevistados recordó que cuando se inició la gestión del gobierno provincial hubo mucha gente que se opuso, pues decían: “como van a gobernar los campesinos”. Razón por la cual, a pesar de,

haber ganado las elecciones es recién en abril [y no en enero, que es cuando se asumen los cargos] que pueden asumir la dirección de la municipalidad.

A pesar de todo, en Ilave se puede observar más claramente –a diferencia de otras ciudades tradicionales- la movilidad social de los sectores campesinos experimentada por el acceso a la educación superior y por mejores niveles de ingreso como los comerciantes. Lo cual ha servido para que estos sectores sociales ocupen cargos de poder que antes estaban reservados para otros.

Es así como se podría explicar porque en esta ciudad podemos ver a antiguos dirigentes campesinos transformados hoy en potenciales candidatos municipales, burócratas, alcaldes o regidores. La trayectoria política de los líderes locales se puede resumir entonces como un primer paso por las organizaciones de base campesina o urbana (ya sea ésta gremial o de política comunal), lo cual, les otorga experiencia política previa así como un espacio de socialización y de conformación de redes de influencia; y un segundo paso, por la política estatal local o por el afán de llegar a ésta.

5. Ilave: Abril del 2004

El conflicto central que tuvo como escenario la ciudad de Ilave, capital de la provincia de El Collao, ocurrió a lo largo del mes de abril del 2004. Los principales sucesos se extendieron desde el 2 de abril con la realización de una asamblea abierta informativa en la plaza de la ciudad; y culminaron, a fines del mes, con el compromiso entre la población y una comisión de alto nivel del gobierno central de solucionar la conducción del municipio, además, con la detención de algunos de los presuntos actores del asesinato del alcalde provincial.

Sin embargo, el conflicto en general no se inició en abril, sino varios meses atrás con la denuncia de actos de corrupción del alcalde y sus allegados en el municipio. Y no concluyó con la muerte del alcalde ni con la detención de los presuntos culpables, si no que, se extendió por varios meses más después del reemplazo y sustitución de varias autoridades municipales hasta culminar en las elecciones complementarias del 17 de octubre de ese año. Una mirada a la política local ilaveña y a los hechos después de un año nos muestra un escenario complicado e inestable aún, la percepción de algunos líderes y pobladores nos confirma que, los sucesos de abril del 2004 han cambiado el rostro de la ciudad y de la política local.

5.1 A manera de pequeña crónica

Una mirada detallada del conflicto suscitado en el mes de abril del 2004¹⁶ nos muestra el aumento creciente de la tensión entre las facciones enfrentadas. A medida que, los días transcurrían y las soluciones no se presentaban, las posiciones de los dos bloques enfrentados se fueron endureciendo, provocando de uno y otro lado incidentes violentos, llegando a su punto cumbre el día 26 de abril con el asesinato de Cirilo Robles Callomamani, alcalde provincial, en la plaza principal de la ciudad. Al respecto, se tejen varias versiones: del lado de los opositores, se dice que, ese día hubo una agresión

abierta iniciada desde la casa del alcalde asesinado, lugar donde éste junto a sus regidores aliados se encontraban sesionando en una reunión de Concejo. Mientras que, los seguidores del alcalde declaran que la agresión se dio inicio desde las afueras de la vivienda, por los opositores que entraron violentamente a la casa, para después tomar como rehenes al alcalde y sus seguidores, flagelarlos públicamente hasta dar muerte al primero y dejar gravemente heridos a los demás. Si bien, no se puede afirmar cuál de las dos versiones es verdadera y a los hechos poco importa quién dio inicio a los actos violentos, lo cierto es que, antes del 26 de abril, ambos grupos se enfrentaron abierta y violentamente durante varias semanas, y la sesión de Concejo convocada ese día por Cirilo Robles fue una actitud de provocación en una ciudad sitiada por los opositores que pedían su renuncia.

Los entrevistados, testigos claves de los hechos, declararon que, en los días de mayor movilización la plaza de la ciudad reunió a casi 10 mil habitantes, la mayoría de ellos provenientes de las zonas rurales de la provincia, organizados y liderados por sus autoridades comunales: los tenientes gobernadores, presidentes comunales y alcaldes de centros poblados menores. Desde el inicio del conflicto hasta el final, por todo el mes de abril, estos pobladores se turnaron para pernoctar y mantenerse en la ciudad. Así, junto a los pobladores rurales, los habitantes de la ciudad, jóvenes y otras organizaciones sociales, pudieron mantener tomado el municipio y sitiados los principales accesos a la ciudad por todo un mes.

Los incidentes enfrentaron dos bloques principales: el alcalde provincial, Cirilo Robles Calomamani, y los regidores leales a éste; y del otro lado, aquellos grupos descontentos con la gestión del mismo. Este último, liderado por el teniente alcalde, Alberto Sandoval y cuatro regidores del municipio provincial, los cuales, tuvieron como sus principales aliados a pobladores de las zonas rurales y organizaciones del ámbito urbano como el Frente Único de Defensa de llave (FUDI) liderado por Valentín Ramírez Chino, comerciante ganadero de la zona. A este bloque opositor se unirán los comerciantes del mercado central organizados en el Frente Único de Comerciantes.

El año 2002 Cirilo Robles Callomamani, se presentó a las elecciones del gobierno provincial por Unión Regional para el Desarrollo (URPD), por la misma lista, como primer regidor, postulaba Alberto Sandoval. En buena medida ambos iban de la mano con el fin de ocupar la dirección municipal de El Collao.

No era la primera vez que Robles y Sandoval se unían para liderar una opción política. En el transcurso del gobierno provincial de José Antonio Maquera (1998-2002) ambos personajes encabezaron un grupo opositor que buscó infructuosamente la revocatoria de este alcalde. En el año 1998 ambos habían postulado a la alcaldía provincial por diferentes listas, Robles Callomamani resultó segundo en número de votaciones por la invalidación de una de las mesas de sufragio. Este hecho sirvió para que Robles argumentara que las elecciones le habían sido robadas por el partido de gobierno, y de ahí provendría su afán continuo de revocar al alcalde electo ese año. Se podría decir entonces, que a Robles y Sandoval los unió desde el principio la

frustración de haber perdido una elección y conjuntamente la ambición de llegar al poder municipal.

En el 2003, una vez dentro del poder municipal, la alianza entre Robles y Sandoval se deterioró rápidamente. A tres meses de iniciada la nueva gestión los desacuerdos entre ambos se fueron cristalizando y dando paso a bloques opositores dentro del seno del mismo gobierno, ya para abril del 2004 el Concejo Provincial¹⁷ se encontraba dividido en dos facciones opuestas, los leales al alcalde Robles y el grupo de regidores opositores liderado por Sandoval.

Las denuncias sobre malversación de fondos, obras incumplidas, altos sueldos a los funcionarios leales a Robles, fueron entre otras, las razones que Sandoval fue desarrollando a través de una campaña de desprestigio de su ocasional aliado. Por su parte, Robles haciendo caso omiso de las continuas acusaciones, que se gestaban al interior del municipio, continuó con un estilo autoritario y patrimonialista, con lo cual ayudó a azuzar los ánimos y a generar mayor desconfianza al interior y exterior del municipio provincial.

“[Robles] entra al poder, él se siente dueño de todo, él quiso manejar todo con su capricho... Entonces, ahí se alejó, hubo aislamiento entre la autoridad y la sociedad... Entonces qué hizo, cuando nosotros nos organizábamos, no con afán de molestarlo, él mandaba a su gente [y] estos te ponían en caos... Se enfrentó con todas las organizaciones”
(Entrevista No 10)

En este ambiente tenso, el grupo disconforme con la gestión de Robles, solicitó repetidas veces una rendición de cuentas pública. Finalmente, el 2 de abril de 2004 el alcalde convocó a una asamblea pública en la plaza de la ciudad, la cual, terminó con enfrentamientos violentos entre las facciones dejando a 11 heridos graves y con el local del municipio provincial tomado por los pobladores. Una vez más las versiones de nuestros entrevistados se contradicen sobre estos hechos, culpando a la otra facción sobre el inicio de la violencia desatada. No podemos saber a ciencia cierta cómo ocurrieron los hechos, lo cierto es que, el estilo de confrontación política entre los grupos y facciones siempre estuvo teñido de posiciones extremas que no buscaban lograr un mínimo de acuerdo entre las partes.

Así, se dio inicio a la creciente violencia colectiva que duraría por todo el mes de abril, los numerosos intentos de solución que se presentaron en su momento por instituciones y autoridades, no pudieron llegar a ningún acuerdo entre las partes. En el extremo de una actitud cerrada y confrontacionista los grupos opositores al fallecido alcalde, Robles Callomamani, desconocieron una y otra vez a las personas designadas por el Jurando Nacional de Elecciones como alcalde interino provincial hasta realización de las elecciones complementarias en octubre del 2004¹⁸.

Después de un año de los sucesos la tensión entre las partes aún se puede respirar en el ambiente de la ciudad. Hay 41 implicados por la muerte del alcalde, sin embargo, sólo uno de ellos ha sido sindicado como el autor del crimen, mientras los otros cuentan con orden de comparecencia. El municipio

provincial a cargo de Miguel Ángel Flores se presenta como un aliado de este grupo pues les ha otorgado por un tiempo la concesión de los baños municipales para que puedan administrarlos y cobrar por estos servicios. Si bien, los márgenes de ganancia que pueden reportar estos servicios son mínimos, esta concesión con nombre propio deja la sensación que un grupo se estaría beneficiando de este servicio público. Estas extrañas alianzas no quedan acá, al contrario, el municipio como parte de su política ha dado cuotas de trabajo¹⁹ a distintas organizaciones y grupos todas ellas protagonistas de los sucesos de abril del 2004.

Estas alianzas afianzan el argumento, muchas veces esgrimido por los principales protagonistas de los sucesos, que Miguel Ángel Flores llega al poder gracias a las luchas emprendidas por la población movilizada. Llegando a la conclusión que, tal como él ha sido beneficiado con el cargo directriz todos los partícipes de la movilización deberían recibir su cuota de poder y beneficios a partir del municipio. Situación que tendría su contraparte en la parte afectada, es decir, en los que resultaron fuera del poder (los aliados de Robles), los cuales, terminan por afianzar la idea que la muerte del alcalde se debió a intereses políticos y económicos, pues lo único que buscaron los opositores fue asirse ilegítimamente del poder municipal. En definitiva, se terminaría consolidando la percepción general, que parece estar detrás de todos los conflictos locales suscitados en los municipios, que el órgano municipal sirve como botín de guerra para repartirse entre todos aquellos que llegan al poder.

El nuevo gobierno provincial tiene pequeños márgenes para una actuación fuera de presiones. De uno y otro lado, se lanzan dardos envenenados para presionar al alcalde de tomar determinada decisión y acción. Lo cual genera una débil estabilidad para gobernar y establecer consensos.

Por otro lado, genera la sensación de una pérdida del respeto a la autoridad, pues, a decir de varios de nuestros entrevistados, después de los conflictos, los pobladores se hicieron de un poder nunca antes visto.

“La población ya no respeta a las autoridades... la población todos tienen derecho, todos quieren hacer, todos se sienten alcalde en otras palabras, y lo toman al alcalde como uno de sus empleados” (*Entrevista N° 10*)

La mayoría de los entrevistados suponen que en llave no volverán a sucederse hechos similares a los vividos en abril del 2004, sin embargo, todos coinciden en que hoy la situación se ve un poco más caótica: la ciudad está más desordenada y los pobladores ya no tienen miedo a la policía como fuerza represora. La pérdida de respeto a la autoridad se plasma así en una falta de respeto hacia las normas y la ley.

Si bien, la sensación de pérdida de autoridad y la falta de respeto hacia las normas y leyes es una constante en la vida cotidiana de cualquier parte del país, la situación vivida en llave, significó para sus pobladores evidenciar un poder desbordado de la masa, el cual, a pesar de haber protagonizado un asesinato éste terminó quedando impune. Lo cual termina configurando un escenario precario para la actuación política democrática, pues se vive con la

certidumbre que la persona, grupo o facción que tiene más poder puede hacer todo lo que quiera sin tener ninguna sanción por sus actos.

5.2 Una manera de interpretación de los hechos

La escalada creciente de violencia, la confrontación extrema de las posiciones, la precariedad de las alianzas y las nociones patrimoniales del poder público son todos signos de la política local que nos deja el recuento de los hechos de abril del 2004.

Es evidente que desde el principio la alianza entre Robles y Sandoval fue débil y pronto salieron a relucir los intereses particulares de cada uno. Sin embargo, nos preguntamos por qué no fue posible la reconstitución de esta alianza, por qué fue tan difícil conciliar intereses y finalmente repartirse el poder entre ambos. Algunos encuentran en la actitud política de cada uno de estos personajes la explicación para el desenvolvimiento de los hechos, pues “ambos compartían un estilo autoritario y una propensión a resolver los conflictos por la vía de la confrontación” (Grupo Propuesta Ciudadana, 2004: 5).

¿Cuál era la relación entre Sandoval y Robles?

El hombre era un mañoso, que se ponía enfermo... a veces su trato era normal, pero también decía ustedes son unos chibolos, ese trato tenía...yo tengo experiencia... [yo le decía] que esperabas tú, gracias a Fernando Robles siquiera eres regidor... yo aclaro públicamente que Sandoval sólo había utilizado a Robles como bandera, para solamente ganar y su pensamiento siempre había sido sacarlo, como dice vacarlo...”

¿Ud. como calificaría la relación que tenía Alberto Sandoval y Fernando Robles?

Al principio eran amigos, pero en el fondo no había sido así... Sandoval lo había utilizado como bandera nada más, entonces cuando ya empezó a ser alcalde, Fernando Robles decía: yo soy alcalde y punto...” (Entrevista N° 12)

Nosotros también consideramos que parte de la explicación para el desenvolvimiento de los hechos tiene que ver con la actitud confrontacionista de ambos personajes. Pero creemos que ésta no sería una actitud basada en las personalidades de ambos personajes, si no que, sería una actitud que se alimenta en política local como forma de una cultura política que, configuraría finalmente un espacio político cerrado y excluyente. Por lo que, las posiciones enfrentadas difícilmente pueden llegar a soluciones concertadas sin llegar antes a un enfrentamiento extremo.

a) La conformación de los grupos

Las alianzas entre los personajes de la política local se establecen sobre lealtades primarias como la amistad y el paisanaje. Los dirigentes y líderes son reclutados por los grupos políticos sobre la base de la amistad que se tienen entre si y es así como se generan y crean los grupos políticos que compiten por un lugar en el poder municipal:

“En la última campaña he sido invitado por el movimiento MARQA, acá lideró un compañero de la zona media... mi nacimiento es de la zona media, yo me siento más que todo un ciudadano de la zona media, por eso más que todo acepté acompañarlo. No tanto viendo... que cosa iba ser su posición del MARQA... acepté por la persona” (*Entrevista N° 10*)

Sobre la base de estas lealtades primarias se configuran las alianzas que pueden llevar a un grupo al poder. Lealtades que a la larga pueden resultar fuertes si se cumplen los compromisos entre las partes, pero, si estos se rompen, la sensación de traición y deslealtad puede significar que el eventual aliado se convierta en un enemigo en potencia.

“A mi no me gustaba la política... en el 95 yo he asumido como alcalde del centro poblado de Suyo y el amigo Lucio Vargas inmediatamente me captura, me dice: hay trabajo, quieres trabajo, y quien no pues... pero no había sido con esa condición si no con condición política... a partir del 95 empecé a ver lo que era la vida política con Lucio Vargas... de ahí ya me gustó la vida política... en el 98 sigue la política, ese año hay elecciones, entonces Lucio Vargas se va para Pílcuyo y lo deja acá al Dr. Sabino Asención ... no hemos podido ganar pues ese año... y de ahí yo me he apartado de Lucio Vargas (...)

Faltando dos semanas llegó aquí a buscarme una persona y me dice: tú no vas a ir con Lucio Vargas. No, no, yo no voy... tú eres testigo, acaso me has visto trabajar cuando estaba como alcalde de Pílcuyo [Lucio Vargas] a pesar que yo he gastado plata, pero acaso me ha dicho si quiera ven acá hay un trabajito, nada, como es posible... entonces me dice: Fernando Robles te llama, quiere encontrarse contigo...ahorita te está esperando en su casa (...)

Esa noche vino el golpe a casa... esa noche a la una de la mañana empezaron a golpear acá [a mi casa] con piedras y arrancaron con un auto, esa era gente de Lucio Vargas porque ya ha visto que yo estaba [con Robles] dos fuertes bullas hemos hecho en la plaza ahí me han visto, el caballo ya esta ahí... así fue como me atacaron... después de media hora habían bajado para Suyo a atacar a mi papá...” (*Entrevista N° 12*)

Es así como las amenazas y las agresiones verbales y físicas son parte del escenario político local, parte de la relación que establecen los contrincantes de turno. Algunos de los entrevistados manifestaron que habían sufrido amenazas de muerte por parte de sus opositores, por lo que, la agresión física siempre está latente como forma de coaccionar y amedrentar al posible contrincante. De manera indirecta agresiones verbales de todo tipo se pueden ver en los pronunciamientos públicos de algunas organizaciones:

“Las organizaciones populares, las comunidades campesinas, centros poblados y los barrios de la provincia de El Collao –Ilave. Expresamos nuestro enérgico rechazo y repudio a una nueva banda delincencial y mafioso que se ha instalado en la municipalidad, integrado por personas acostumbradas al saqueo, robo, chantaje y al terror (...) Edgar Larijo Cutipa... es un bruto, imbécil, cochino y vago. Su vida personal desde muy joven ha dedicado al abigeato y robo...” (*Pronunciamiento de los aliados de Robles a cumplirse un año de la muerte de su líder*)

Los grupos entonces, se configuran sobre la concepción que el contrincante es un potencial enemigo y por lo tanto hay que excluirlo de la competencia que ambos emprenden. Se conforman así facciones enfrentadas desde el principio de la competencia. Situación que se reproduce al interior de los grupos, pues, como hemos visto, las lealtades internas se pueden romper si no todos sienten que son reconocidos en sus esfuerzos. Entonces, las alianzas basadas en lealtades primarias están siempre al filo de la navaja, a punto de romperse.

Por tanto, la actuación política de los grupos se muestra como reacia y desconfiada ante el otro. Basada en el ánimo de excluir al adversario-enemigo de una competencia que se hace cada vez más feroz.

b) La lógica radical

La historia política local nos da como referente que muchos de los actuales líderes tienen como trayectoria política haber sido parte de los frentes de lucha y movilización en los años 80. La experiencia movimientista de la acción política, establecida en la lógica de las soluciones sobre la base del “todo o nada” y “hasta las últimas consecuencias”, se trasladó así, a un escenario político actual de facciones encontradas.

La diferencia radica en que en el pasado las condiciones sociales enfrentaban sectores sociales contrapuestos, campesinos-terratenientes; o después de la reforma agraria, campesinos-Estado. En tanto enfrentaba posiciones e intereses claramente definidos y antagónicos esta lógica dio frutos y definió el esquema de actuación política; sin embargo, hoy es difícil establecer claramente los intereses contrapuestos de las posiciones encontradas, los límites se desdibujan y cada facción postula intereses privados incapaces de aglutinar y congregar intereses comunes. Lo cual, hace más difícil aún establecer alianzas de más largo plazo.

Por otro lado, no nos olvidemos que los principales actores del conflicto pertenecieron en su momento a opciones de izquierda radical²⁰ entrenados en un juego político abiertamente confrontacional. Parte de esta tradición y experiencia sería parte de un espacio político que hoy se presenta como cerrado y excluyente.

c) La concepción de autoridad

La autoridad ejercida por el alcalde es la principal figura en el escenario local. Como decíamos párrafos anteriores el municipio provincial es un espacio de poder desde el cual se otorgan recursos y favores. Por tanto, la competencia por ocupar el sillón municipal se vuelve encarnizada y no termina con la designación del ganador por las elecciones sino que se mantiene durante todo el periodo de gobierno, pues, generalmente los “perdedores” buscan vacar al alcalde electo ya sea por medio de los mecanismos institucionales como por otros medios de presión. La autoridad del alcalde entonces no concluye con la designación de éste por los mecanismos formales de su elección sino que siempre está en juego su capacidad para mantenerse en el cargo.

Hemos visto como el escenario político se presenta como un espacio plagado de facciones compitiendo entre sí; por lo que, el ganador de las elecciones representará a un grupo de intereses minoritario, y por lo tanto, una vez dentro del poder tendrá que tener capacidad y predisposición para ser un buen conciliador y negociador para establecer alianzas con los grupos que quedaron fuera.

Entonces, en tanto pueda establecer consensos y minimizar los conflictos entre las facciones, la autoridad ganará en legitimidad, pues, desde fuera se le podrá ver como aquel que puede llevar a cabo un proyecto y aquel que puede hacerse respetar y al cual se le puede obedecer. La diferencia entre las gestiones de Ticona y Robles es elocuente de esta capacidad. No es que el primero no se haya enfrentado a facciones contrapuestas en su momento sino que pudo establecer alianzas con aquellos que se presentaban como más fuertes y más incómodos para llevar a cabo su gestión. Finalmente, pudo establecer toda una red de alianzas estratégicas que pudo mantener en base a compromisos y prebendas, los cuales fueron resquebrajándose con la gestión de Maquera y finalmente se rompieron con Robles, pues éste intento desconocerlas para establecer sus propias alianzas.

Robles se enfrentó a facciones dentro y fuera del poder lo que hizo que las consecuencias de su caída fuera más nefasta, pues no supo jugar con las reglas implícitas en un escenario fraccionado y confrontacional. Así, su gestión siempre proyectó una imagen de un gobierno desordenado y caótico, que no podía mostrar ningún margen de acuerdo ni de unidad. La imagen del mismo Robles se mostró como cada vez más renuente y su estilo autoritario se tradujo en “aquel que quiere hacer lo que le da la gana”.

Acordémonos que, la capacidad que Ticona demostró para establecer alianzas se basó en su carisma y en un estilo personalista de gestión marcadamente autoritaria. Así, su voluntad se convirtió en norma para la acción; por lo que, difícilmente se podría prescindir de su apoyo para lograr alguna dádiva o compromiso desde el municipio. Entonces, no es el rechazo al autoritarismo lo que produjo el descontento generalizado hacia la gestión de Robles, sino la diferencia entre uno y otro. Ticona podía verse como aquella autoridad investida de una capacidad para hacer de su voluntad una acción, la cual siempre tenía que ver con cumplir los acuerdos con otros; es decir, con repartir parte de su poder y sus privilegios. En cambio, Robles proyectó la imagen de una autoridad que no le importaba otorgar ninguno de sus propios privilegios, por lo que, se fue quedando cada vez más solo y generó un rechazo de sus opositores y de la población en general.

d) El patrimonialismo

Es bien conocida la concepción patrimonial que se tiene sobre lo público en nuestro país. Concepción que se traduce en el manejo privado de los recursos públicos, situación que, se reproduce a distinta escala del poder. El gobierno municipal no es la excepción a esta regla.

El grupo que llega al poder municipal sabe que puede manejar los recursos públicos como bien lo crea conveniente, no sin antes establecer alianzas estratégicas que le permitan ampliar sus redes de influencia y poder, manteniendo así una clientela capaz de otorgarle estabilidad en un escenario fragmentado y plagado de facciones.

De lo que se trata, entonces, no sólo es manejar al libre albedrío el poder y los recursos otorgados, sino también, distribuir parte de éste con el fin de establecer una red dependiente, pues, finalmente el que decide qué y a quién se otorga determinado recurso será la autoridad competente. Se crea así toda una clientela leal que puede mantener el bloque de poder.

La concepción patrimonial del recurso público genera a su vez la imagen de una autoridad dadivosa y comprometida con los demás. Los recursos no se otorgan porque sean parte de los derechos de los pobladores sino como un favor otorgado desde arriba, generándose toda una cadena de favores que se paga con la lealtad de los clientes.

Conclusiones

La mirada a largo plazo de la historia regional y local del escenario de los sucesos de abril del 2004 nos evidencian un campo de tensión social vividos por periodos intermitentes. Al principio de siglo hasta la década del 80 el conflicto social en torno a la tenencia de la tierra fue el referente de lucha de las masas organizadas. En los últimos años este referente se trasladó a la gestión de los gobiernos locales, los cuales representan una nueva forma de poder sobre el uso y usufructo de los recursos.

Los altos índices de pobreza encontrados en toda la región nos ponen en evidencia el problema de la desigualdad y la escasez de recursos, por lo que, cualquier elemento que suponga un mínimo margen de privilegio sobre estos supone a su vez un factor de inestabilidad social. Actualmente, los recursos públicos, canalizados por los gobiernos locales, se convierten en un recurso valioso en medio de una situación de pobreza generalizada. Por lo que más de una vez estos son percibidos como botín de guerra en medio de luchas faccionales.

El análisis demográfico, además, nos demostraba una ruralidad extendida en la zona, no es casualidad que llave, aún cuando sea considerada como la tercera ciudad importante de la región, tenga características sociales, políticas y culturales que unen lo urbano y lo rural. Configurando un escenario de transición donde ya no sólo se unen lógicas distintas de actuación sino además se entremezclan sentidos y procesos de más larga data, con lo cual, los actores políticos, en este caso, tienen que responder a nuevos parámetros de actuación pero a la vez convivir con tradiciones que han marcado la pauta de referencia para su actuación por varias décadas.

Este escenario de transición se afianza aún más con la implementación de una joven institución de la democracia moderna como el municipio provincial, el

cual, coloca en el campo político nuevas reglas de juego que se deberán ir afianzando con el tiempo y con los procesos de participación electoral y ciudadana. Pero que aún no han calado en los actores “acostumbrados” a una política de tipo comunal y gremial.

Así, encontramos en la política local características que nos revelan, por un lado, una política tradicional, y por otro, una política más moderna. Por ejemplo, el afianzamiento de las relaciones cara a cara, la confianza en la palabra empeñada antes que en las instituciones, los liderazgos carismáticos (marcadamente autoritarios), la conformación de grupos sobre lealtades primarias, serían, entre otros, los signos de una política de corte tradicional derivada de una sociedad rural. Junto a estos signos se levanta una serie de nuevos parámetros de actuación como la política partidaria, la participación ciudadana, la fiscalización y transparencia de las funciones, etc. características de una política moderna basada más en las normas y procedimientos en lugar de las personas. Lo cual choca con lo anterior entendido como las formas de la política tradicional.

De esta manera, lo que hemos visto a lo largo de la descripción del escenario de los conflictos ha sido un estilo político marcadamente personalista y autoritario que termina por chocar y friccionar con estas nuevas reglas de juego político.

Por otro lado, detrás de este escenario de transición se conjuga las características de un escenario social y político descrito hasta ahora como un espacio fraccionado, en el cual, la exclusión y dominación son sus principales referentes. Terminando por afianzarse una relación asimétrica de poder que, sin embargo, contempla márgenes para la negociación, por lo que la exclusión y la dominación no son totales, si no, contempla límites y reglas de juego: los actores (se ubiquen dentro o fuera de los espacios de poder) saben hasta donde puede llegar su poder e influencia. En este sentido, si bien el gamonalismo como forma de relación política pervive en el espacio local, éste se ha ido reconfigurando, para abrir algunos espacios para la negociación.

De esta manera, el espacio político que habíamos denominado como cerrado y excluyente no es total, pues se abre e incluye en determinados momentos y ante determinados sucesos, dejando dentro a algunos y fuera a otros –los menos peligrosos para la estabilidad política.

Así, las fracciones sociales y políticas se traducen casi siempre en facciones enfrentadas, alimentadas por la desconfianza hacia el otro, y por la sensación de usurpación ilegítima de los cargos. Esto finalmente, debilita la posibilidad de una política partidaria que suponga la creación de una comunidad política de intereses compartidos. Por lo que, el espacio siempre se concebirá como excluyente, los que quedan fuera del poder –municipal en nuestro caso– tendrán que esperar su turno para poder hacer y beneficiarse de las cosas que se pueden lograr desde dentro.

La extensión del patrimonialismo, como hemos dado a conocer al uso privado de los recursos públicos, no hace más que afianzar el sentimiento que los que

están dentro del aparato burocrático estatal se encuentran en una situación de privilegio frente a otros. Pues pueden canalizar estos recursos de acuerdo a su voluntad, generando toda una cadena de favores que deben ser pagados con lealtad. Así, el clientelismo y el personalismo terminan por afianzarse pues no hay más voluntad que la de la autoridad para hacer efectiva cualquier petición o compromiso.

Finalmente, la debilidad institucional y un escenario político y social fragmentado, configuran un escenario de transición como el descrito para la ciudad de Ilay, donde se conjugan distintas lógicas que los actores deben aprender a manipular para su efectivo juego político. En este espacio no es fácil establecer parámetros democráticos efectivos sin fricciones de por medio. Al mismo tiempo, en un contexto de pobreza y desigualdad no es fácil establecer criterios para el desarrollo de una ciudadanía plena y con esto el afianzamiento de las instituciones y la cultura política que desarrollen los parámetros de una democracia efectiva y no sólo formal. Sin embargo, la pobreza no genera por sí sola un escenario de fragilidad democrática, pero sí condiciona algunos de los principios sobre los que se sustenta.

¹ Los datos que se consignan corresponde al último Censo Nacional realizado el año 1993.

² La clasificación “raza de pertenencia” figura como criterio diferenciador hasta el año 1940 en el Censo Nacional Peruano.

³ La denominación de “cholo” sobre alguien no es neutra, al contrario es una denominación cargada de racismo y exclusión. Así en un estudio que se hiciera en jóvenes limeños con padres provincianos, la autora encuentra que “lo cholo remite a una identidad externa, pero internamente no tiene aún una aceptación positiva. Lo cholo es fundamentalmente un conflicto y un problema por resolver” (Cosamalón, 1993: 213). En este sentido, la identidad de cholo o la denominación de cholo sobre alguien es algo que no se acepta de buena manera pues remite a algo que no se quiere ser. De esta manera, el “choleo” o denominar a otro como “cholo” sirve para diferenciarse y establecer jerarquías; sin embargo, siempre se corre el riesgo de ser considerado como cholo uno mismo. Por lo tanto, tal denominación además de jerárquica será ambigua y dinámica (Bourricaud, 1967: 25). Las características de lo mismo nos remiten al racismo que existe en la sociedad peruana, que funciona ambiguamente, pero que es sumamente desgarrador

⁴ “Estas formas de asentamiento adquieren características que las distinguen de los pueblos rurales y de las grandes ciudades, constituyendo una categoría de espacio intermedio e híbrido entre lo rural y lo urbano (...) Las ciudades son consideradas intermedias básicamente por el rol que desempeñan en los diferentes flujos (político, económico, cultural) que se dan en el territorio. La dinámica de estas ciudades se mide por la capacidad de las mismas para establecer una red de relaciones entre los demás núcleos urbanos y los núcleos urbanos y el campo. Son a su vez, centros de intercambio económico y de interacción social y cultural. Finalmente, son también espacios que albergan algunos niveles de la administración del gobierno a nivel local”. (Llona, op. cit. pp. 162-163)

⁵ En una sociedad con enormes deficiencias económicas resulta un privilegio contar con un ingreso mensual más o menos estable. Recuerdo que, conversando con un poblador campesino, éste me confesaba que la actividad agrícola traía enormes desventajas, pues al menos con un empleo en el municipio, ya sea de vigilante, guardián o en cualquier otro puesto, él tendría un ingreso mensual que, aunque sea poco era seguro, pero que, en el campo nunca podía prever cuando tendría plata y cuando no.

⁶ En efecto, Távora y Romero encuentran que algunos de los problemas que atraviesan actualmente los municipios rurales se deriva de la destrucción sistemática de Sendero Luminoso de las instancias de poder local y con esto de la presencia por más de una década de las Fuerzas Armadas como la principal forma de poder ejercido a nivel local (Távora y Romero, 1998:190) .

⁷ Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, de los 61 conflictos entre autoridades y población el 74% de estos tiene como actor principal al municipio distrital ubicado en su mayoría en zonas rurales (Defensoría del Pueblo, marzo 2005). Si bien en pocos casos de estos conflictos se ha llegado a los

niveles de violencia de los sucesos de Ilave, en muchos de ellos la toma de los locales municipales y la toma de rehenes ha sido parte de las estrategias usadas por los grupos opositores.

⁸ Gregorio Ticona llegó a la municipalidad provincial de Puno por FIJO en 1998. En el año 2000 llegó al Congreso de la República por la agrupación nacional Somos Perú, ya dentro de éste, seducido por el poder del oficialismo se pasó a las filas de Perú 2000. Siendo considerado el primer tráfuga en la historia de la política peruana.

⁹ El trabajo de campo, que comprendió la observación y entrevistas a profundidad, se realizó en la ciudad de Ilave en el mes de Julio del 2005.

¹⁰ La reconstrucción del puente antiguo y el asfaltado de la carretera Ilave-Masocruz fueron obras consideradas como importantes y urgentes para la población. Sin embargo, éstas no llegaron a concretarse durante los casi dos años de la gestión de Cirilo Robles, lo cual sirvió para ahondar el descontento generalizado de la población, y sirvió además, como campaña de desprestigio para la gestión municipal, culminando en los lamentables sucesos de abril del 2004.

¹¹ Gregorio Ticona vive actualmente en la ciudad de Tacna. Se encuentra con arresto domiciliario por presuntos actos de corrupción, más específicamente, por haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos para pasarse en el Congreso de las filas de Somos Perú a la bancada oficialista en el año 2000.

¹² Se implementaron mecanismos de participación ciudadana como el COVECO (Consejo Vecinal y Comunal) donde se daba cuenta de la rendición de cuentas, la realización de obras y la entrega de algún apoyo a la población rural.

¹³ El descontento de los pobladores rurales con la gestión de Robles Callomamani se desencadenó porque éste desconoció los recursos que se les venía otorgando desde la gestión municipal anterior. La transferencia de recursos se fue instaurando en el sentido común de los pobladores como parte de las obligaciones del municipio provincial con los centros poblados. Por lo que, romper con esta obligación implica desconocer parte de los derechos de estos pobladores.

¹⁴ Uno de los hermanos fue regidor en el segundo periodo de Gregorio Ticona y Director Municipal en la gestión de José Antonio Maquera. El otro de los hermanos trabajó para la gestión de J. A. Maquera en las direcciones de imagen institucional y el terminal terrestre.

¹⁵ Antes de 1991 el distrito de Ilave pertenecía a la provincia de Chucuito, en la cual, la ciudad de Juli es la capital provincial.

¹⁶ Para un recuento detallado de los hechos de Abril del 2004 en Ilave consúltese Degregori, 2004.

¹⁷ Antes de continuar con los hechos conviene que aclaremos la función y conformación del Concejo Provincial. El Concejo Provincial es la entidad que regula y fiscaliza las funciones y el presupuesto del municipio. Es decir, en el papel, cualquier decisión que se tome desde el municipio tiene que pasar por este órgano de control interno. Por otro lado, el Concejo está conformada por el alcalde provincial y los regidores. Los regidores son elegidos junto con el alcalde por lista electoral, y la repartición de estos cargos se da de la siguiente manera: a la lista ganadora se le asigna la mitad más uno de los cargos de regidores, y el número restante se reparte entre las listas que quedaron fuera por orden de votación. Por ejemplo, para el caso que nos compete, la lista ganadora de URPD llevó al Concejo 6 regidores y los tres cargos restantes se repartieron entre la segunda, tercera y cuarta agrupación electoral. En la práctica, ir como primer regidor en las listas electorales asegura relativamente un lugar en el futuro Concejo, por esto, para algunos líderes locales resulta tentador ir en este puesto en la lista que postulen. Además, siendo primer regidor de la lista ganadora asegura el puesto de teniente alcalde dentro del municipio, como segundo del alcalde que, si bien no tiene funciones específicas, asume el puesto de la alcaldía ante la ausencia del mismo.

¹⁸ **IDAS Y VENIDAS PARA OCUPAR EL SILLÓN MUNICIPAL PROVINCIAL EN EL COLLAO**

08/05 Tras la muerte de Cirilo Robles, el JNE encargó la alcaldía al regidor Arnaldo Chambilla. Este declina del cargo.

23/05 Arnaldo Chambilla es reemplazado por Ramón Arias con otro cuerpo de regidores, designado también por el JNE.

04/06 Los dirigentes aimaras desconociendo a Ramón Arias como alcalde interino, toman juramento público a Miguel Flores Chambi designándolo como nuevo alcalde provincial. El JNE no lo reconoce como tal.

15/07 Ramón Arias renuncia a su cargo pero el JNE no determina su vacancia.

10/09 Ramón Arias en uso de sus funciones y en reunión con varios regidores delega al regidor Ricardo Butrón como el nuevo alcalde interino.

11/09 Los tenientes gobernadores de las comunidades de la provincia de El Collao desconocen la designación del regidor Ricardo Butrón como alcalde.

28/09 El edificio municipal de Ilave es reabierto después de 6 meses de haber permanecido cerrado. El acto fue encabezado por Miguel Flores Chambi, alcalde designado por los pobladores.

17/10 Elecciones complementarias en la provincia de El Collao.

19/10 Miguel Ángel Flores Chambi es el nuevo alcalde de la provincia de El Collao. Flores Chambi postuló por Fuerza Democrática, una de las 11 organizaciones inscritas, y obtuvo el 23.4% de la votación.

¹⁹ El municipio acordó dar a cada comunidad rural una cuota de trabajo dentro del municipio. Así, cada teniente gobernador tiene la potestad de “mandar” a la persona de la comunidad que en el mes ocupará un puesto de trabajo en el municipio. Las personas que ocupan estos puestos de trabajo van rotando de acuerdo a lista. Uno de los entrevistados nos contó que este compromiso fue parte de los acuerdos tomados entre Miguel Ángel Flores y las comunidades para apoyarlo en su candidatura. Al principio cada organización que había estado involucrada en los sucesos de abril del 2004 contaba con una cuota de trabajo en el municipio pero esto resultó muy complicado de cumplir, por lo que, los únicos que ahora cuentan con este compromiso es la gente de la zona rural por medio de sus tenientes gobernadores.

²⁰ El fallecido alcalde Robles Callomamani perteneció en su juventud a las filas de Patria Roja, por su parte el teniente alcalde, Alberto Sandoval, perteneció a Pukallacta. Ambos grupos pertenecieron a la corriente maoísta de los años 80 y 90. Pukallacta escisión de Patria Roja, fue atraída por el proyecto político armado de Sendero Luminoso. Alberto Sandoval fue acusado de terrorismo a mediados de los 90.